

Construyendo el poder de la comunidad

Acuerdos de Beneficios Comunitarios a lo
largo de la cadena global de suministro de
energía

James J. A. Blair, Emmett Hopkins, Tai Kondo
Koester, Kate Berry, Alida Cantor, Dustin
Mulvaney, Thea Riofrancos, Toni Symonds,
Noel Vineyard, Bryce Sprauer, Bethani Turley,
Thien-Kim Bui, Reva Butensky, and Lorena De
La Puente Burlando

Climate &
Community
INSTITUTE



Climate and Community Institute (CCI) es un centro de investigación y análisis progresista sobre clima y economía. Nuestro equipo en crecimiento y nuestra red de más de 60 académicos, académicas y personas expertas asociadas crean y movilizan investigación de vanguardia en la intersección entre la desigualdad y la crisis climática. Luchamos por una agenda transformadora que descarbonice la economía de manera rápida y equitativa, al enfocarse en beneficios materiales para la gente trabajadora.

Autores

James J. A. Blair, Emmett Hopkins, Tai Kondo Koester, Kate Berry, Alida Cantor, Dustin Mulvaney, Thea Riofrancos, Toni Symonds, Noel Vineyard, Bryce Sprauer, Bethani Turley, Thien-Kim Bui, Reva Butensky, and Lorena De La Puente Burlando.

Cita sugerida:

Blair, James J. A., et al. "Building Community Power: Community Benefits Agreements Across the Global Energy Supply Chain," Climate and Community Institute, October 2025,
<https://climateandcommunity.org/research/cbas>.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a las siguientes personas por brindar generosamente información valiosa y asesoría durante la elaboración de este informe. Personal de CCI: Lucy Block; Rithika Ramamurthy; Johanna Bozuwa. Personas del ámbito académico y comunitario encargadas de la revisión: Christian Torres, Luis Olmedo y Lorna Avila (Comite Civico del Valle); Rebekkah Dilts y Patrick Dexter (United Auto Workers); Jared Naimark (Earthworks); Daniela Flores (Imperial Valley Equity & Justice); Shanny Spang Gion (University of Idaho); Carolyn Shafer (Patagonia Area Resource Alliance); Heidi Moore-Guynup, Ysabelle Yrad y Madison Hunt (Blue Lake Rancheria); Sheila Davis (GAIA); John Hadder (Great Basin Resource Watch y Western Mining Action Network); Bobby Cochran (Oregon Consensus); Ugo Lapointe, Ginger Gibson, Kyle Vermette, Cameron Gunton y Anuja Thapa (The Firelight Group); Theo Figurasin, Valerie Lizarraga, Athena Last; Jacob Rodriguez y Ian Elder (Jobs to Move America); Amanda Woodrum (Relmagine Appalachia); y Philippe Le Billon (University of British Columbia).

Nuestro agradecimiento también se extiende a Data4Change por su atento trabajo de diseño y a Will Fraser por su esmerada corrección de estilo. Gracias a The 11th Hour Project y The William and Flora Hewlett Foundation por apoyar este trabajo.

Contenido

Resumen ejecutivo	2
Introducción	10
Disposiciones comunes de los CBAs	29
Advertencias y alternativas: más allá de los CBAs	44
Recomendaciones en materia de políticas	50
Conclusión	59

Resumen ejecutivo

Los Acuerdos de Beneficios Comunitarios (CBAs) —acuerdos jurídicamente vinculantes entre grupos comunitarios y desarrolladores de proyectos— son una herramienta que las comunidades pueden utilizar para ejercer control sobre su futuro.

Para enfrentar la crisis climática a la escala necesaria, es esencial una transición global de los combustibles fósiles a las energías renovables. Es posible que esto no resuelva todos los problemas sociales y ecológicos, pero ese cambio traería beneficios enormes para las comunidades de todo el mundo, entre ellos estabilizar las temperaturas globales, reducir la contaminación del aire, ampliar la energía de cero emisiones y generar empleos e inversiones locales en el proceso. También es una oportunidad para que las comunidades construyan poder: cuando las comunidades están organizadas, conocen sus derechos y saben cómo moverse en el panorama de la formulación de políticas y las inversiones, pueden obtener beneficios materiales de la transición energética. Los Acuerdos de Beneficios Comunitarios (CBAs por sus siglas en inglés) —acuerdos jurídicamente vinculantes entre grupos comunitarios y desarrolladores de proyectos— son una herramienta que las comunidades pueden utilizar para ejercer control sobre su futuro.

En los últimos dos años, el Climate and Community Institute (CCI) realizó investigación a escala global sobre las mejores prácticas de los CBAs, entrevistó a comunidades que participan activamente en negociaciones de CBAs y analizó el diseño de políticas junto con algunos de los académicos, académicas y profesionales más destacados en CBAs y en materia de transición energética. Nuestro hallazgo más constante es que, cuando las comunidades se organizan desde temprano en el proceso, conocen sus derechos y las oportunidades para ejercer presión y participar, y trabajan en coalición con aliadas y aliados, tienen el poder de moldear la economía política de la transición energética: cómo se distribuyen las cargas y los beneficios, cómo se diseñan y gobiernan los proyectos e, incluso, si vale la pena permitir que un proyecto avance o no. De manera crucial, también encontramos que, al estudiar toda la cadena de suministro de la transición energética —desde la extracción hasta el procesamiento, la manufactura y el transporte, así como la generación, el almacenamiento y la transmisión de energía eléctrica— pudimos identificar oportunidades latentes para la organización intersectorial y una gobernanza equitativa.

En términos generales, los CBAs jurídicamente vinculantes que tratan a las comunidades como socias recíprocas tienden a generar un apoyo local más duradero a las políticas que invierten en la economía verde.

Esa investigación dio como resultado el presente informe detallado, redactado principalmente para los organizadores comunitarios y defensores que trabajan con tribus, grupos de justicia ambiental y movimientos laborales. También puede ser útil para desarrolladores de proyectos que buscan establecer relaciones de confianza y positivas con las comunidades. El informe incluye una amplia gama de estudios de caso detallados, así como análisis de políticas y recomendaciones con requisitos, estándares y recursos concretos. Se puede leer como una narrativa lineal o con una mentalidad de “elige tu propia aventura” si ciertos estudios de caso, políticas o recomendaciones resultan más relevantes que otros para los lectores. Un conjunto de herramientas complementario está diseñado para apoyar de manera más directa a los organizadores comunitarios y defensores en el inicio, la negociación y la implementación de CBAs, con hojas de trabajo interactivas, plantillas, documentos de ejemplo y otros recursos.

Tomar el poder a lo largo de la cadena global de suministro de energía

El CBA suele ser el último movimiento de las comunidades. Con demasiada frecuencia, las comunidades tienen poco poder en el proceso de planificación de un proyecto, y la persona desarrolladora del proyecto suele estar muy interesada en limitar la disidencia y acelerar el proyecto mediante el establecimiento de un acuerdo. Nuestro informe intenta contrarrestar esta dinámica identificando maneras en que las comunidades puedan actuar desde el principio, incorporando compromisos de CBAs de “alto estándar” que sean jurídicamente vinculantes y exigibles —salarios, prestaciones, capacitación de alta calidad y otras disposiciones que se describen a continuación— en lugar de conformarse con migajas al final.¹

¹ Carol Zabin, *Putting California on the High Road: A Jobs and Climate Action Plan for 2030* (UC Berkeley Labor Center, 2020), <https://laborcenter.berkeley.edu/putting-california-on-the-high-road-a-jobs-and-climate-action-plan-for-2030/>.

Los CBAs sólidos son el resultado de comunidades organizadas que toman acción colectiva para construir poder, en dos sentidos de la palabra.

Demasiado a menudo, el desequilibrio de poder entre los grupos comunitarios y las personas desarrolladoras de proyectos es tan desproporcionado que es difícil que la comunidad obtenga compromisos, inversiones o salvaguardas significativas a través de un CBA.

Los CBAs sólidos son el resultado de comunidades organizadas que toman acción colectiva para construir poder, en dos sentidos de la palabra. Primero, las comunidades necesitan construir poder para tener un lugar en la mesa al negociar un CBA jurídicamente vinculante y exigible. El poder comunitario crea las condiciones para el empoderamiento social y económico a nivel local. “Comunidad” puede incluir a personas trabajadoras, así como a pueblos indígenas y residentes locales afectados por posibles impactos. Segundo, al garantizar que las comunidades se beneficien de la transición energética, los CBAs establecen las condiciones para el despliegue rápido de energía de cero emisiones, lo que a su vez redistribuye energía más limpia de regreso a las comunidades en un círculo virtuoso. Nuestro informe analiza los límites y las posibilidades de los CBAs para sostener la soberanía indígena, lograr justicia ambiental y construir solidaridad a lo largo de la cadena global de suministro de energía.

En Estados Unidos, los CBAs se entienden comúnmente como herramientas de aplicación relativamente limitada, utilizadas principalmente para negociar asuntos laborales y de contratación en proyectos de reurbanización. Sin embargo, existe una historia más larga de acuerdos de conciliación negociados dentro y fuera de Estados Unidos con pueblos indígenas y comunidades locales sobre agua, tierra, territorio y recursos. Los CBAs no son una invención estadounidense restringida a las ciudades de Estados Unidos, y los casos globales de acuerdos jurídicamente vinculantes negociados entre empresas multinacionales y comunidades locales ofrecen advertencias, así como modelos para avanzar en los derechos indígenas, la distribución de beneficios y la propiedad comunitaria. Es especialmente crucial considerar este tipo de acuerdos cuando se trata de corporaciones ausentes en las industrias extractivas que desde hace tiempo han dejado su huella en el Sur Global —un extractivismo arraigado en el imperialismo y el colonialismo— y que

Los CBAs son instrumentos dinámicos, flexibles y pueden diferir de manera significativa según el contexto.

ahora desempeñan un papel cada vez más destacado al proveer materiales para baterías e infraestructura, tanto en alta mar como en tierra firme.

Nuestro enfoque de solidaridad a lo largo de la cadena de suministro explora una amplia gama de acuerdos en toda la red de producción global de energía renovable y transporte electrificado. Por ejemplo, los CBAs para manufactura han incorporado estándares laborales y de contratación, así como principios de justicia racial establecidos a través de negociaciones de CBAs en proyectos de desarrollo urbano. Los CBAs para proyectos de infraestructura de energía renovable tienden a funcionar como un mecanismo burocrático para distribuir cuotas modestas a través de gobiernos locales o estatales que pueden, o no, generar beneficios significativos para las comunidades directamente afectadas. Los proyectos de desarrollo extractivo para obtener materiales necesarios en la manufactura de baterías y tecnologías de energía renovable presentan nuevos retos y oportunidades para implementar CBAs que respalden la soberanía indígena y la justicia ambiental en zonas rurales. Exploramos estudios de caso en cada uno de estos diferentes nodos de la cadena de suministro —extracción, procesamiento, manufactura y transporte, así como generación, almacenamiento y transmisión de energía eléctrica—, además de describir las normas jurídicas internacionales pertinentes y los marcos de políticas a nivel federal, estatal y municipal.

Aprovechar las disposiciones de los CBAs para construir poder comunitario

Los CBAs son instrumentos dinámicos, flexibles y pueden diferir de manera significativa según el contexto. En cualquier eslabón de la cadena de suministro, los CBAs sólidos deben ofrecer una combinación de disposiciones basadas en las prioridades locales que más importan para las personas de la comunidad. Con base en una revisión de CBAs a lo largo de la cadena de suministro, hemos categorizado temáticamente las disposiciones generales que contienen, desde la gobernanza hasta las disposiciones financieras, laborales, ambientales y de aplicación y cumplimiento. Nuestro informe ofrece ejemplos de estudios de caso relevantes para ilustrar

cada una de las siguientes disposiciones, así como estrategias que las comunidades han utilizado para una negociación efectiva.



Gobernanza

Las comunidades tienen el poder de establecer las condiciones y gestionar los resultados de los CBAs. Las disposiciones de gobernanza permiten que las comunidades aporten opiniones sobre el diseño y la gestión de los proyectos, y pueden incluir:

1. Reconocimiento de los derechos indígenas, los recursos culturales tribales y las obligaciones asociadas al consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés)
2. Identificación de representantes y autoridades de toma de decisiones del CBA
3. Duración del CBA, enmiendas y fecha de vencimiento
4. Descripción de los procesos de toma de decisiones, los requisitos de informes y de reuniones
5. Referencia cruzada a los planes existentes de desarrollo comunitario



Finanzas

Las comunidades tienen el poder de negociar CBAs que vayan más allá de los apoyos corporativos de “paga para participar”, con ingresos reservados para usos relacionados. Los diferentes acuerdos financieros que resultan de los CBAs pueden incluir:

1. Pagos directos (únicos o recurrentes)
2. Subvenciones para necesidades comunitarias definidas (p. ej., infraestructura, parques, becas, vivienda asequible, educación temprana, gestión de residuos, etc.)
3. Cuentas de fideicomiso o fondos de beneficios comunitarios administrados por un tercero para el manejo del dinero
4. Propiedad parcial o participación en las utilidades de las operaciones con medidas de mitigación del riesgo y la responsabilidad (p. ej., acciones gratuitas o préstamos sin intereses)
5. Ingresos diversificados con pagos fijos y regalías sobre los productos generados o extraídos (p. ej., kWh de energía, toneladas de cobre, porcentaje de los ingresos, etc.)



Trabajo

Las comunidades tienen el poder de construir una fuerza laboral local y generar desarrollo económico duradero a través de los CBAs.

Estas disposiciones pueden incluir:

1. Empleos de "alto estándar" que permitan sostener a una familia, con prácticas equitativas de contratación y promoción para eliminar barreras para las personas trabajadoras locales (es decir, transporte y cuidado infantil)
2. Compromisos salariales con neutralidad sindical
3. Salud y seguridad relacionadas con el trabajo
4. Compromisos con contratos para empresas comerciales locales en desventaja
5. Capacitación de la fuerza laboral, incluida la capacitación en el trabajo y requisitos de utilización de programas de aprendizaje



Medio ambiente

Las comunidades tienen el poder de exigir que las disposiciones de los CBAs vayan más allá de las regulaciones y medidas de mitigación requeridas, para seguir principios de justicia ambiental que aspiren a beneficios ambientales netos y a la revitalización cultural. Las disposiciones ambientales pueden incluir:

1. Prohibiciones de prácticas específicas de desarrollo
2. Beneficios netos positivos más allá de la mitigación compensatoria
3. Requisitos de monitoreo y transparencia de la información, con sanciones por contaminación y obligaciones de remediación
4. Financiamiento de estudios de terceros y fortalecimiento de capacidades para analizar los impactos del proyecto
5. Planes para la reducción gradual de operaciones y cierre mediante desmantelamiento



Aplicación y cumplimiento

Las comunidades tienen el poder de exigir la rendición de cuentas de las empresas y los gobiernos a través de los CBAs. Las disposiciones de aplicación y cumplimiento pueden incluir:

1. Proceso de resolución de disputas y/o cláusula(s) de arbitraje
2. Transparencia, requisitos obligatorios de intercambio de datos y de informes, y descripción de las sanciones u obligaciones legales por no cumplir con el CBA
3. Identificación de los roles y responsabilidades de las organizaciones que son parte del acuerdo
4. Asunción de las obligaciones contractuales en caso de adquisición, bancarrota, ejecución hipotecaria, etc.
5. Capacidad de reabrir o renegociar el acuerdo en función de la revisión ambiental

Estrategias clave para la negociación de CBAs

A partir de las lecciones de los estudios de caso examinados en nuestro informe, así como de nuestras sesiones de revisión comunitaria, hemos identificado estrategias clave que han sido fundamentales para que las coaliciones comunitarias logren negociar con éxito un CBA sólido. Estas incluyen:

- Organizarse y actuar para aportar comentarios significativos desde temprano y con frecuencia.
- Tener cuidado con la mitigación y el cumplimiento requeridos que se presentan disfrazados de beneficios comunitarios.
- Adoptar un enfoque intencional de inclusión, ya sea para una coalición amplia o muy unida.
- Participar en grupos asesores comunitarios.
- Empoderar a líderes locales de confianza para que asuman el papel de personas negociadoras.
- Encontrar una organización estable y con recursos suficientes que sirva como ancla del proceso de negociación.
- Aumentar el poder de negociación comunicándose a lo largo de la cadena de suministro sobre experiencias compartidas.

Advertencias y alternativas: más allá de los CBAs

Este informe no pretende promover los CBAs si no es apropiado que las comunidades participen en negociaciones sobre proyectos inaceptables o que no pueden mitigarse. De hecho, enfatizamos que los CBAs no sustituyen los principios de derechos humanos consagrados en el derecho internacional, como el consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés). Incluimos las implicaciones de los CBAs para sostener el FPIC, tomamos en serio las críticas a los CBAs como una forma de greenwashing y describimos enfoques centrados en los pueblos indígenas para “trabajar de buena manera” más allá de monetizar los beneficios.

Recomendaciones principales

Para incentivar a gobiernos, organizadores comunitarios, defensores, así como a desarrolladores de proyectos a elevar el piso para lograr beneficios comunitarios más sólidos en la transición energética, ofrecemos las siguientes recomendaciones:

- 1. Exigir CBAs:** los gobiernos pueden establecer los CBAs como condición para otorgar permisos o financiamiento, con criterios claros que maximicen la representación comunitaria y aborden las preocupaciones de cada una de las categorías de disposiciones señaladas anteriormente.
- 2. Establecer estándares claros y consistentes para los CBAs:** las comunidades pueden definir qué disposiciones deben incluirse en un CBA sólido.
- 3. Preparar el terreno para la negociación de CBAs:** el sector público puede crear las condiciones para que las comunidades tengan más poder al negociar acuerdos justos.
- 4. Brindar apoyo directo a las comunidades para negociar CBAs:** las personas organizadoras pueden abogar por más recursos para apoyar a las comunidades que requieren asistencia adicional.

Este informe ofrece ejemplos detallados y sugerencias para que gobiernos, organizadores, defensores, expertos y profesionales construyan poder comunitario a través de cada una de estas recomendaciones. Nuestro [conjunto de herramientas complementario para CBAs](#) ofrece orientación práctica adicional y hojas de trabajo interactivas, plantillas, documentos de ejemplo y otros recursos para entablar negociaciones efectivas orientadas a lograr un CBA sólido y exigible.

¿Cómo pueden los pueblos indígenas y las comunidades de justicia ambiental minimizar las cargas y maximizar los beneficios en los acuerdos relacionados con las industrias extractivas y la energía renovable?

Introducción

Este informe analiza los límites y las posibilidades de los acuerdos de beneficios comunitarios (CBAs por sus siglas en inglés) para construir poder comunitario a lo largo de la cadena de suministro en la transición energética.² Es necesario un cambio urgente hacia las energías renovables para dejar atrás los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático global. Pero ¿bajo qué condiciones pueden los CBAs —acuerdos jurídicamente vinculantes entre grupos comunitarios y desarrolladores de proyectos— hacer que esa transición sea más justa? ¿Cómo pueden los pueblos indígenas y las comunidades de justicia ambiental minimizar las cargas y maximizar los beneficios en los acuerdos relacionados con las industrias extractivas y la energía renovable?

Para investigar estas preguntas, realizamos investigación sobre acuerdos de distribución de beneficios a nivel global y nacional a lo largo de la cadena de suministro de vehículos eléctricos y energía renovable, con el fin de informar las mejores prácticas y señalar las advertencias más significativas. Examinamos la literatura académica pertinente y revisamos documentos de ejemplo de acuerdos, que interpretamos de manera amplia para incluir no solo los CBAs conocidos de desarrollo urbano en Estados Unidos, sino también una

² Aunque usamos a lo largo del informe el término algo simplista de “cadena de suministro”, este informe se basa en el trabajo crítico de científicas y científicos sociales que han desarrollado conceptos más relacionales, como red global de producción, cadena global de mercancías o cadena global de valor. Estos conceptos más amplios van más allá del flujo lineal de una cadena de suministro convencional —de la materia prima a los productos de consumo— para examinar las dinámicas sociales, económicas, políticas y ecológicas que se entrecruzan. Vea: G. Gereffi and M. Korzeniewicz, *Commodity Chains and Global Capitalism* (Praeger, 1994); Gary Gereffi et al., “The Governance of Global Value Chains,” *Review of International Political Economy* 12, no. 1 (2005): 78–104; Gavin Bridge, “Global Production Networks and the Extractive Sector: Governing Resource-Based Development,” *Journal of Economic Geography* 8, no. 3 (2008): 389–419; Gavin Bridge and Erika Faigen, “Towards the Lithium-Ion Battery Production Network: Thinking beyond Mineral Supply Chains,” *Energy Research & Social Science* 89 (July 2022): 102659, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102659>.

gama más amplia de acuerdos negociados jurídicamente vinculantes entre comunidades y empresas en todo el mundo.

Recopilamos publicaciones relevantes de bases de datos de revistas académicas y de grupos de la sociedad civil, y las categorizamos según su pertinencia para cada etapa de la cadena de suministro, a fin de sintetizar los hallazgos clave. Comparamos distintos tipos de disposiciones en estos acuerdos y consultamos informes y conjuntos de herramientas existentes sobre CBAs. A partir de ese trabajo, seleccionamos una variedad de estudios de caso que abarcan la cadena de suministro, realizamos entrevistas y compilamos una base de datos de políticas y disposiciones de CBAs para conectar las lecciones clave que atraviesan la red de producción global de energía renovable y transporte electrificado, desde la extracción inicial hasta la distribución y el consumo finales.

Nuestra investigación se nutre de numerosos estudios de caso realizados por los autores y se basó en una combinación de métodos que incluyen entrevistas, grupos de enfoque, revisión de literatura, análisis de documentos y análisis de políticas. El informe no es exhaustivo, y una limitación de nuestro amplio alcance es que algunos estudios de caso incluyen más datos de entrevistas directas y una participación comunitaria de largo plazo, mientras que otros se basan en mayor medida en la revisión de literatura de fuentes secundarias. Sin embargo, a lo largo del proceso de investigación hablamos con organizadores comunitarios y defensores que han participado en negociaciones de CBAs y llevamos a cabo múltiples instancias de revisión comunitaria y de pares, de modo que el contenido del informe refleje de la mejor manera posible las necesidades y experiencias de los integrantes de la comunidad, las tribus, los trabajadores, los negociadores y los facilitadores.

Antes de profundizar en nuestro amplio conjunto de estudios de caso, políticas y disposiciones globales y de Estados Unidos, a continuación (1) **exponemos nuestra visión sobre cómo los CBAs más sólidos pueden ayudar a construir solidaridad a lo largo de la cadena de suministro**; (2) **hacemos una distinción crucial entre los CBAs y el principio más fundamental del consentimiento libre, previo e informado** (FPIC, por sus siglas en inglés); y (3) **examinamos las maneras en que las comunidades pueden intervenir para construir**

poder antes de que las personas desarrolladoras inicien obras en cualquier proyecto.

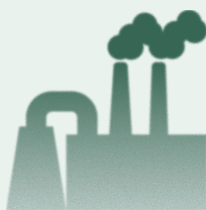
Solidaridad en la cadena de suministro para beneficios comunitarios más sólidos

En este informe exploramos una amplia gama de casos globales y locales que, en conjunto, ofrecen una ventana para entender cómo las comunidades pueden construir solidaridad a través de etapas diversas pero interconectadas de las cadenas de suministro de energía y minerales, incluidas: la extracción, el procesamiento, la manufactura y el transporte, así como la generación, el almacenamiento y la transmisión de energía eléctrica.

De los minerales a la manufactura



La **extracción** se refiere al desarrollo de “minerales de transición energética” no renovables —insumos materiales para tecnologías, dispositivos e infraestructuras relacionadas con la descarbonización del sistema energético— como el litio, el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el platino, el paladio y el antimonio. También recurrimos a casos más convencionales de extracción de minerales, como el petróleo y el oro, en la medida en que ofrecen precedentes relevantes para los CBAs en la transición energética.



El **procesamiento** de los recursos naturales en materiales puede implicar muchos tipos de preparación, conversiones químicas o refinamiento para transformarlos en productos, combustibles o partes que se puedan usar en la manufactura o el ensamblaje. Las emisiones continuas, los efluentes y los riesgos comunitarios derivados del procesamiento pueden, en algunos casos, convertir estas actividades en candidatas para CBAs sólidos.



La **manufactura** se refiere a la producción de bienes físicos, tecnologías e infraestructuras que hacen posible la generación, el almacenamiento y el consumo de energía: paneles solares, baterías de litio y movilidad eléctrica (autos, autobuses y trenes eléctricos). Esto puede abarcar desde transformar materias primas en productos hasta el ensamblaje de productos manufacturados en bienes finales.

Electricidad renovable



La **generación de energía eléctrica** se refiere a la energía para producir electricidad. Examinamos estudios de caso sobre viento, sol e hidrógeno, y a la vez extraemos lecciones de acuerdos de buena vecindad para la refinación de petróleo.



Los activos de energía renovable también pueden integrarse con capacidades de **almacenamiento**, ya sea almacenamiento en baterías a escala de servicios públicos, almacenamiento de larga duración en microrredes o almacenamiento hidráulico por bombeo.



La **transmisión** se refiere a las líneas de alta tensión y largo alcance que desempeñan un papel especialmente esencial en la distribución de energía renovable, dadas las realidades de la intermitencia y la ubicación geográfica diversa de los activos de energía renovable.

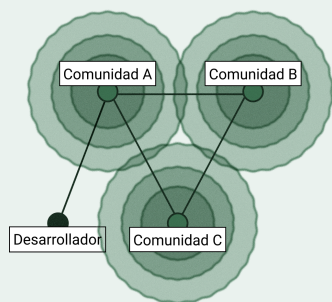
Cada una de estas etapas de la cadena de suministro desempeña un papel en la transición energética. Sin embargo, en muchos casos existen vínculos potencialmente más específicos entre estos nodos dentro de una red global de producción. Por ejemplo, la producción de una mina de litio es el insumo de una planta manufacturera de baterías, que a su vez podría producir un componente esencial para un vehículo eléctrico o un autobús, o para almacenamiento estacionario en una red.

De hecho, en estados de Estados Unidos, como por ejemplo Nevada, se están desarrollando múltiples etapas de la cadena de suministro en un clúster regional, aunque no necesariamente de forma coordinada. Varias minas de litio, entre ellas Thacker Pass —una empresa conjunta entre Lithium Americas y General Motors (GM)—, cuentan con permisos y/o están en construcción a unas cuantas horas de la Gigafactory Nevada de Tesla. Esta planta produce celdas, paquetes y módulos de baterías, así como componentes de motores eléctricos.

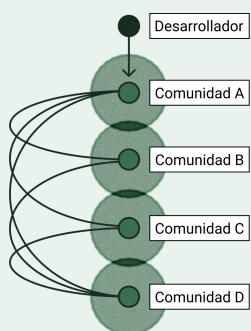
Dentro del mismo “Lithium Loop” hay un centro de instalaciones de reciclaje de baterías, incluidas Redwood Materials, Aqua Metals y American Battery Company. Estas cadenas de suministro no son exclusivamente locales. Por ejemplo, GM estableció una empresa conjunta con Lithium Americas para abastecer con litio de la mina Thacker Pass a las fábricas de baterías en Michigan, Ohio, Tennessee e Indiana, lo que se espera que convierta a esta mina en una fuente clave de litio para la flota de vehículos eléctricos de la compañía automotriz.

Quienes promueven estos proyectos desde el gobierno y la industria han planteado de manera similar el desarrollo propuesto de Lithium Valley en California, cerca del Salton Sea en el condado de Imperial, como un conjunto amplio de usos de suelo industriales “verdes” centrados en la energía geotérmica y la extracción de litio. Aunque estos proyectos de energía y extracción pueden contribuir a los esfuerzos de descarbonización, probablemente no generen tantos empleos de alto estándar y de largo plazo como la manufactura. Se necesita una planificación cuidadosa para maximizar los beneficios del desarrollo económico mediante un enfoque más holístico, ya sea a través de la integración vertical o de vínculos horizontales a lo largo de la cadena de suministro. En última instancia, los impactos y beneficios acumulados serán más importantes para las comunidades y sus entornos que una colección de proyectos aislados con resultados dispares.

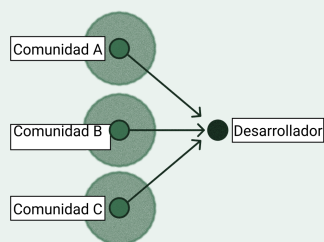
Dado que nuestro enfoque son los CBAs, estas relaciones entre las empresas y los sectores que abordamos en el informe plantean la pregunta de cuáles son las implicaciones para el poder comunitario y la solidaridad en la cadena de suministro. Surgen algunas posibilidades hipotéticas.



La primera es la posibilidad de **difusión**: las comunidades en un nodo de una red de producción global aprenden de sus contrapartes en otro nodo. Esto podría verse, por ejemplo, en una comunidad afectada por un proyecto de generación solar que se organiza para lograr concesiones de la persona desarrolladora, inspirando así a una comunidad vecina afectada por la línea de transmisión que distribuiría esa energía a negociar un resultado similar.



Una segunda posibilidad de coordinación sería la **construcción de relaciones** más explícitas entre comunidades afectadas a lo largo de la misma cadena de suministro, que se coordinen para informarse mutuamente sobre posibles daños o trampas de gobernanza, así como para maximizar los beneficios que reciben de los proyectos.



Esto se relaciona directamente con una tercera posibilidad: que las comunidades unan fuerzas para ejercer **presión simultánea** sobre una sola empresa involucrada en múltiples nodos o sobre varias empresas a lo largo de la misma cadena de suministro.

Por último, vale la pena señalar que estos mecanismos son aún más aplicables en situaciones de integración vertical, como el ejemplo de la participación accionaria de GM en una mina de litio, lo que remite a un modelo de producción fordista.

Independientemente de si las comunidades trabajan juntas o no, entender las cadenas de suministro es fundamental para determinar el alcance de un proyecto determinado, decidir si es aceptable o no para la comunidad desde un principio con base en sus posibles impactos, identificar puntos de intervención en el desarrollo del proyecto y negociar beneficios comunitarios que respondan a las necesidades de la comunidad y estén alineados con el proyecto.

Los CBAs no sustituyen el consentimiento ni la consulta

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (Núm. 169) de la ILO reconoce el derecho a la consulta previa antes de cualquier “medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente.”

A partir de finales de la década de 1980, surgió un nuevo régimen jurídico internacional que reconoció los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación territorial y a la integridad cultural. Al reconocer los siglos de genocidio, despojo y asimilación forzada —y señalando el papel particular de los sectores extractivos en la perpetuación de estos daños— organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) y las Naciones Unidas (UN) establecieron una serie de derechos para los pueblos indígenas.

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (Núm. 169) de la ILO reconoce el derecho a la consulta previa antes de cualquier “medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente.”³ El Convenio 169 de la ILO se centra específicamente en la minería, y señala que, aun cuando los gobiernos sean propietarios de los recursos del subsuelo, deben consultar a los pueblos indígenas antes de la extracción y que, en lo que atañe a nuestros propósitos, estas comunidades “deberán participar siempre que sea posible en los beneficios de tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir.”⁴

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas va más allá, al aclarar que el objetivo de la consulta es el consentimiento y al establecer la ahora ya clásica formulación de “consentimiento libre, previo e informado” como el punto de referencia de las interacciones entre los pueblos indígenas y las corporaciones y/o los gobiernos.⁵ Esta expresión se ha institucionalizado por sí misma y suele mencionarse por su acrónimo en inglés: FPIC.⁶

³ C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), consultado el 16 de marzo de 2025, https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE%2CP55_LANG%2CP55_DOCUMENT%2CP55_NODE:REV%2Cen%2CC169%2C%2FDocument.

⁴ C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), 169.

⁵ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (2007), https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf.

⁶ Cultural Survival et al., “Securing Indigenous Peoples’ Right to Self-Determination: A Guide on Free, Prior and Informed Consent,” Cultural Survival, septiembre de 2023, <https://www.sirgecoalition.org/fpic-guide>. Para una base de datos de protocolos de FPIC desarrollados por pueblos indígenas, vea: European Network on Indigenous Peoples (ENIP), “Free, Prior and Informed Consent Protocols of Indigenous Peoples,” consultado el 11 de marzo de 2025, <https://fpic.enip.eu/en/>.

FPIC, derecho a saber y derecho a decir que no

El **consentimiento libre, previo e informado (FPIC)**, por sus siglas en inglés, “free, prior and informed consent”) es un principio reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), diseñado para garantizar la participación e incorporación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones con base en sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos.⁷ FPIC es un proceso continuo que abarca tanto el involucramiento y el diálogo como el derecho a otorgar o a negar el consentimiento.⁸ Las expectativas sobre lo que constituye un FPIC significativo pueden variar de Nación a Nación o de comunidad a comunidad.⁹ Según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, los elementos comunes de FPIC incluyen lo siguiente:

- **Libre** debe implicar ausencia de coerción, intimidación o manipulación.
- **Previo** debe implicar que se haya solicitado el consentimiento con suficiente anticipación a cualquier autorización o inicio de actividades y que se respeten los tiempos que requieren los procesos indígenas de consulta y consenso.
- **Informado** debe implicar que se brinde información que abarque (al menos) los siguientes aspectos:
 - a. La naturaleza, magnitud, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuestos;
 - b. La(s) razón(es) o propósito(s) del proyecto y/o la actividad;
 - c. La duración de lo anterior;
 - d. La ubicación de las áreas que se verán afectadas;
 - e. Una evaluación preliminar del impacto económico, social, cultural y ambiental probable, incluidos los riesgos potenciales y la distribución justa y equitativa de beneficios, en un contexto que respete el principio de precaución;

⁷ UNDRIP, 2007.

⁸ Cultural Survival et al., “Securing Indigenous Peoples’ Right to Self-Determination: A Guide on Free, Prior and Informed Consent.” For a database of protocols for FPIC developed by Indigenous peoples, see: European Network on Indigenous Peoples (ENIP), “Free, Prior and Informed Consent Protocols of Indigenous Peoples.”

⁹ Emily Martin et al., “Expectations for Meaningful Free, Prior, and Informed Consent: An Exploration by the Little Salmon/Carmacks First Nation,” *The Extractive Industries and Society* 23 (September 2025): 101653, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101653>.

- f. El personal que probablemente participará en la ejecución del proyecto propuesto (incluidas personas indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación, funcionariado de gobierno y otras personas);
- g. Los procedimientos que pueda implicar el proyecto.
- **Consentimiento** [debe incluir consulta, participación y consentimiento.] La consulta y la participación son componentes fundamentales de un proceso de consentimiento. La consulta debe realizarse de buena fe. Las partes deben entablar un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo, buena fe y participación plena y equitativa. La consulta requiere tiempo y un sistema eficaz de comunicación entre las partes interesadas. Los pueblos indígenas deben poder participar a través de sus propios representantes libremente elegidos y de sus instituciones consuetudinarias u otras instituciones propias. Es esencial incluir una perspectiva de género y la participación de mujeres indígenas, así como la participación de niñas, niños y jóvenes, según corresponda. Este proceso puede incluir la opción de negar el consentimiento. El consentimiento a cualquier acuerdo debe interpretarse tal como los pueblos indígenas lo hayan entendido razonablemente.¹⁰

El **derecho comunitario a saber (CRTK)**, por sus siglas en inglés) implica estar plenamente informado sobre un proyecto planificado y sobre sus posibles impactos. Esto es central para FPIC y también es relevante para los residentes no indígenas de comunidades colindantes cercanas a industrias contaminantes.¹¹ En Estados Unidos, el CRTK se estableció mediante la Ley de Planificación para Emergencias y el Derecho a saber de la Comunidad de 1986 (EPCRA, por sus siglas en inglés), en respuesta a la desastrosa explosión en la planta química de Union Carbide en Bhopal, India.¹² La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 de la UN consagró el CRTK en el derecho internacional.¹³ El derecho de una comunidad a saber debe incluir el acceso adecuado a información transparente, el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones y el derecho a obtener justicia frente a posibles daños. El CRTK puede concretarse a través de la planificación para emergencias, los procedimientos de notificación y respuesta, las normas y requisitos de informes de inventario de sustancias químicas peligrosas y

¹⁰ United Nations Economic and Social Council and Permanent Forum on Indigenous Issues, Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples, E/C.19/2005/3 (2005), <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n05/243/26/pdf/n0524326.pdf>.

¹¹ Alison E. Adams et al., "Forty Years on the Fenceline: Community, Memory, and Chronic Contamination," *Environmental Sociology* 4, no. 2 (2018): 210–20, <https://doi.org/10.1080/23251042.2017.1414660>.

¹² US EPA, "Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA)," 2013, <https://www.epa.gov/epcra>; Kim Fortun, *Advocacy after Bhopal: Environmentalism, Disaster, New Global Orders* (University of Chicago Press, 2009).

¹³ United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration on Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol. 1) (Rio de Janeiro, 1992), <https://doi.org/10.4324/9780429310089-10>.

tóxicas, así como conocimientos técnicos y análisis independientes. El CRTK es aplicable antes de que se dé la participación y el diálogo, durante las negociaciones y a lo largo de toda la vida del proyecto.

FPIC también incluye el **derecho a decir que no**, que se invoca si no se concede el consentimiento para un proyecto o si más adelante se revoca dicho consentimiento. El **derecho a decir que no** significa que las comunidades indígenas y/o las comunidades colindantes deben tener la misma oportunidad de participar en la toma de decisiones antes de que comience un proyecto o en cualquier momento durante la vida del proyecto.

Las empresas de minería y energía suelen presentar los acuerdos negociados como prueba de una consulta adecuada, aun cuando el FPIC no se haya implementado ni operacionalizado plenamente en el proceso de desarrollo.¹⁴ Por ejemplo, algunas comunidades indígenas cercanas a un sitio de desarrollo propuesto pueden ser incluidas en los acuerdos, mientras que otras quedan excluidas.¹⁵

Independientemente de si se obtiene o no el FPIC de todos los pueblos indígenas con territorios ancestrales y recursos culturales compartidos o vecinos, las desarrolladoras pueden presentar los CBAs como prueba de una "licencia social para operar"¹⁶ al mostrar rendición de cuentas y responsabilidad social corporativa (CSR, por

¹⁴ Boreal Leadership Council, *Free, Prior and Informed Consent in Canada: A Summary of Key Issues Lessons and Case Studies towards Practical Guidance for Developers and Aboriginal Communities* (Ottawa, 2012), <https://fpic.info/en/resources/free-prior-and-informed-consent-canada-summary-key/>; Philippe Hanna and Frank Vanclay, "Human Rights, Indigenous Peoples and the Concept of Free, Prior and Informed Consent," *Impact Assessment and Project Appraisal* 31, no. 2 (2013): 146–57, <https://doi.org/10.1080/14615517.2013.780373>; Guillaume Peterson St-Laurent and Philippe Le Billon, "Staking Claims and Shaking Hands: Impact and Benefit Agreements as a Technology of Government in the Mining Sector," *The Extractive Industries and Society* 2, no. 3 (2015): 590–602, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2015.06.001>; Martin Papillon and Thierry Rodon, "Proponent-Indigenous Agreements and the Implementation of the Right to Free, Prior, and Informed Consent in Canada," *Environmental Impact Assessment Review* 62 (January 2017): 216–24, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.06.009>; Ben Bradshaw et al., "Impact and Benefit Agreements and Northern Resource Governance: What We Know and What We Still Need to Figure Out," in *Resources and Sustainable Development in the Arctic* (Routledge, 2018).

¹⁵ David Szablowski, "Operationalizing Free, Prior, and Informed Consent in the Extractive Industry Sector? Examining the Challenges of a Negotiated Model of Justice," *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement* 30, nos. 1–2 (2010): 111–30, <https://doi.org/10.1080/02255189.2010.9669284>; Glen Sean Coulthard, *Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition* (University of Minnesota Press, 2014); Alexander Dunlap, "A Bureaucratic Trap: Free, Prior and Informed Consent (FPIC) and Wind Energy Development in Juchitán, Mexico," *Capitalism Nature Socialism*, 2017; Martin Papillon and Thierry Rodon, "Proponent-Indigenous Agreements and the Implementation of the Right to Free, Prior, and Informed Consent in Canada," *Environmental Impact Assessment Review* 62 (January 2017): 216–24, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.06.009>; Audra Simpson, "The Rise of Consent and the Anatomy of 'Refusal': Cases from Indigenous North America and Australia," *Postcolonial Studies*, 2017.

¹⁶ Jason Prno and D. Scott Slocumbe, "Exploring the Origins of 'Social License to Operate' in the Mining Sector: Perspectives from Governance and Sustainability Theories," *Resources Policy* 37, no. 3 (2012): 346–57, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.04.002>; John R. Owen and Deanna Kemp, "Social Licence and Mining: A Critical Perspective," *Resources Policy* 38, no. 1 (2013): 29–35, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.06.016>; Bruce Harvey, "Social Development Will Not Deliver Social Licence to Operate for the Extractive Sector," *The Extractive Industries and Society* 1, no. 1 (2014): 7–11, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2013.11.001>; Jim Cooney, "Reflections on the 20th Anniversary of the Term 'Social Licence,'" *Journal of Energy & Natural Resources Law* 35, no. 2 (2017): 197–200, <https://doi.org/10.1080/02646811.2016.1269472>.

sus siglas en inglés).¹⁷ Mostrar impactos positivos en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una de las formas más importantes para que las desarrolladoras reduzcan el riesgo para las personas inversionistas.¹⁸

La garantía de responsabilidad corporativa se ha vuelto aún más compleja con la proliferación reciente de estándares de auditoría de múltiples partes interesadas, que han creado nuevas formas de estratificación institucional para la gobernanza del FPIC.¹⁹ La Iniciativa para la Garantía de Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés) ha intentado establecer un estándar más alto de divulgación y transparencia, con base en la idea de que este tipo de auditorías podría ayudar a generar impulso para regulaciones más sólidas. IRMA también solicita específicamente o deja espacio para que los pueblos indígenas definan sus propios estándares.

No obstante, los activistas de base por la justicia climática han expresado preocupación por la forma en que las empresas promocionan su pertenencia a redes de minería responsable como una forma de greenwashing o community-washing.²⁰ Por ejemplo, la industria ha intentado establecer la Iniciativa del Estándar Minero Consolidado (CMSI, por sus siglas en inglés), que, según defensores de los derechos laborales y humanos, representa un estándar de “mínimo

¹⁷ Richard Cowell et al., “Acceptance, Acceptability and Environmental Justice: The Role of Community Benefits in Wind Energy Development,” *Journal of Environmental Planning and Management* 54, no. 4 (2011): 539–57, <https://doi.org/10.1080/09640568.2010.521047>; Matthew Himley, “Regularizing Extraction in Andean Peru: Mining and Social Mobilization in an Age of Corporate Social Responsibility,” *Antipode* 45, no. 2 (2013): 394–416, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012.01001.x>; Stuart Kirsch, *Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and Their Critics* (University of California Press, 2014); J. P. Laplante and Catherine Nolin, “Consultas and Socially Responsible Investing in Guatemala: A Case Study Examining Maya Perspectives on the Indigenous Right to Free, Prior, and Informed Consent,” *Society & Natural Resources* 27, no. 3 (2014): 231–48, <https://doi.org/10.1080/08941920.2013.861554>; Robyn Mayes et al., “Our Community: Corporate Social Responsibility, Neoliberalisation, and Mining Industry Community Engagement in Rural Australia,” *Environment and Planning A: Economy and Space* 46, no. 2 (2014): 398–413, <https://doi.org/10.1068/a45676>; Leah S. Horowitz, “Culturally Articulated Neoliberalisation: Corporate Social Responsibility and the Capture of Indigenous Legitimacy in New Caledonia,” *Transactions of the Institute of British Geographers* 40, no. 1 (2015): 88–101, <https://doi.org/10.1111/tran.12057>; Fabiana Li, *Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru* (Duke University Press, 2015); Jessica Smith, *Extracting Accountability: Engineers and Corporate Social Responsibility* (The MIT Press, 2021).

¹⁸ Aparna Sankaran, “ESG Remains the Top Focus for Miners, but Capital Risks Increase as Mineral Demand Pressure Builds amid Energy Transition,” *Ernst & Young*, October 12, 2023, https://www.ey.com/en_gl/newsroom/2023/10/esg-remains-the-top-focus-for-miners-but-capital-risks-increase-as-mineral-demand-pressure-builds-amid-energy-transition.

¹⁹ Teresa Kramarz et al., “Redundancies, Layers, and Dilemmas: Comparing Private Standards and Public Regulations in Lithium Mining,” *The Extractive Industries and Society* 18 (June 2024): 101479, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101479>; Martin Obaya et al., “From Local Priorities to Global Responses: Assessing Sustainability Initiatives in South American Lithium Mining,” *The Extractive Industries and Society* 19 (September 2024): 101509, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101509>; Public Citizen, “Public Citizen Public Consultation Submission to the Consolidated Mining Standard Initiative,” December 16, 2024, <https://www.citizen.org/wp-content/uploads/Public-Citizen-Submission-to-Consolidated-Mining-Standard-Initiative-Final.docx.pdf>.

²⁰ Yes to Life, No to Mining, *10 Reasons Certification Schemes Are Not a Solution* (2023), https://yestolifenotomining.org/wp-content/uploads/2023/05/YLNM-Anti-certification-statement_EN.pdf.

Ya sea que se esté considerando un CBA, un proceso de consulta o de consentimiento, para que tenga un impacto significativo las comunidades deben tener la oportunidad de hacer oír su voz en las primeras etapas del proceso, en la fase de diseño, mucho antes de que se remueva la tierra para el desarrollo.

común denominador” diseñado para dar visto bueno a que todo siga como siempre.

Estos estándares universales son muy diversos. La auditoría de múltiples partes interesadas puede ser un punto de partida, pero cada pueblo indígena o comunidad local está en una posición única para determinar las reglas necesarias de consentimiento y consulta para un proyecto en su territorio. A pesar de las posibles limitaciones en relación con el FPIC, quienes defienden los acuerdos de distribución de beneficios negociados para proyectos mineros y energéticos sostienen que estos contratos jurídicamente vinculantes pueden ofrecer vías adicionales para que las comunidades indígenas afirmen su soberanía y autodeterminación.²¹ Al hacerlo, es fundamental que las personas negociadoras y representantes informen, involucren y consulten a los integrantes de la comunidad durante todo el proceso. Volvemos a este tema hacia el final de este informe, en una sección llamada Precauciones y alternativas.

Ya sea que se esté considerando un CBA, un proceso de consulta o de consentimiento, para que tenga un impacto significativo las comunidades deben tener la oportunidad de hacer oír su voz en las primeras etapas del proceso, en la fase de diseño, mucho antes de que se remueva la tierra para el desarrollo.

Las comunidades pueden intervenir antes de que se inicien las obras

La extracción y el desarrollo de proyectos energéticos suelen ser más contenciosos antes de que comiencen. Mucho antes de que inicie la minería o incluso la construcción, las empresas negocian contratos con gobiernos nacionales (y, en algunos casos, subnacionales) para obtener concesiones y contratos, conseguir permisos ambientales y de otro tipo, y reclutar a los trabajadores para la construcción y la operación. Estas decisiones suelen tomarse mucho antes de que las

²¹ Anthony Bebbington et al., “Mining and Social Movements: Struggles Over Livelihood and Rural Territorial Development in the Andes,” *World Development* 36, no. 12 (2008): 2888–905; Ciaran O’Faircheallaigh and Sally Babidge, “Negotiated Agreements, Indigenous Peoples and Extractive Industry in the Salar de Atacama, Chile: When Is an Agreement More than a Contract?,” *Development and Change* 54, no. 3 (2023): 641–70, <https://doi.org/10.1111/dech.12767>.

empresas se acerquen a las comunidades locales (en violación del FPIC), ya sea mediante acercamientos directos y/o a través de canales oficiales de participación en audiencias, intercambio de información y consulta.²² En cada uno de estos pasos, el objetivo de la empresa es evitar conflictos con funcionariado gubernamental, sindicatos, pueblos indígenas y comunidades de primera línea; es decir, mantener el proyecto en marcha y conservar el interés de las personas financiadoras al reducir el riesgo. Cada una de estas etapas también equivale a lo que las y los economistas llaman un “costo hundido”: el dinero y las horas de trabajo del personal invertidos en la obtención de permisos, la exploración de la tierra y los recursos, las reuniones con miembros de la comunidad y la construcción de la infraestructura física son difíciles o imposibles de recuperar si el proyecto no avanza. La implicación es clara: la resistencia comunitaria, la protesta o el litigio pueden tener un impacto desproporcionado en estas etapas tempranas, antes de que un proyecto sea aprobado, y determinar la diferencia entre que se construya o no una mina o una instalación de energía renovable, o entre un proceso de construcción fluido y otro sujeto a retrasos, pausas y nerviosismo por parte de los inversionistas.

Por razones distintas pero complementarias, la etapa de planificación y predesarrollo también es especialmente trascendental para las comunidades directamente afectadas. De hecho, la investigación muestra que las comunidades tienen más probabilidades de protestar y entablar conflictos de “alta intensidad” en esta fase temprana e indeterminada del desarrollo extractivo (en comparación con comunidades que tienen una historia más larga de convivencia cercana con industrias o proyectos tóxicos).²³ Especialmente cuando una comunidad no ha sufrido previamente los impactos de la minería a gran escala, una enorme mina de cobre o litio a cielo abierto aparece como una disyuntiva muy marcada. En estos contextos, la minería y el desarrollo energético implican un cambio importante de uso de suelo que conlleva una serie de daños ambientales nuevos y

²² Marcela Torres-Wong and Adrian Jimenez-Sandoval, “Indigenous Resource Governance as an Alternative to Mining: Redefining the Boundaries of Indigenous Participation,” *The Extractive Industries and Society* 9 (March 2022): 101001, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101001>.

²³ Bebbington et al., “Mining and Social Movements”; Li, *Unearthing Conflict*; Nick Estes and Jaskiran Dhillon, eds., *Standing with Standing Rock: Voices from the #NoDAPL Movement* (University of Minnesota Press, 2019); Mirja Schoderer and Marlen Ott, “Contested Water- and Miningscapes – Explaining the High Intensity of Water and Mining Conflicts in a Meta-Study,” *World Development* 154 (June 2022): 105888, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105888>.

que puede ser incompatible con los medios de vida vinculados al territorio y las prácticas culturales existentes, o incluso amenazar sectores económicos completos, como la agricultura o el turismo.²⁴

Las apuestas son altas, y tanto los agravios como las acciones directas deben entenderse desde esta perspectiva. Factores adicionales —y trágicamente comunes— pueden aumentar la probabilidad de defensa del territorio o protesta: la exclusión de las comunidades de la toma de decisiones, la represión de la disidencia, la violación de derechos codificados y la intersección entre daños ambientales y sitios sagrados. Cada uno de estos factores incrementa la disposición de las personas de la comunidad a involucrarse en acciones contenciosas, incluso poniendo literalmente sus cuerpos en la línea de defensa, a pesar de la posibilidad concreta de represalias corporativas, criminalización por parte del Estado e incluso lesiones o muerte.²⁵

Puntos de intervención comunitaria: Es fundamental entender en qué etapas del desarrollo de recursos y de la obtención de permisos gubernamentales las comunidades tienen más poder de negociación, para evitar que la participación comunitaria y las negociaciones de CBAs se traten simplemente como una manera de mantener a la posible oposición fuera del proceso de aprobación regulatoria. Al abordar la investigación y la participación como nodos a lo largo de un continuo, las personas de la comunidad y quienes las apoyan pueden aprovechar puntos de inflexión de alto riesgo.

Exploración Aunque la comunidad podría lograr disuadir a las desarrolladoras en esta etapa temprana, puede resultar difícil que el público siquiera se entere de un proyecto o descubra información sobre las intenciones de la empresa. Aun así, se puede obtener información a través de alertas en repositorios de catastro minero, solicitudes de acceso a licencias de exploración mediante leyes de acceso a la información o redes comunitarias de base que reportan visitas de geólogos. Si existen preocupaciones serias sobre impactos que no pueden mitigarse, los organizadores y defensores comunitarios podrían presionar a los gobiernos para declarar una zona libre de minería o establecer una prohibición a nivel regional o nacional.



²⁴ James J. A. Blair et al., "The 'Alterlives' of Green Extractivism: Lithium Mining and Exhausted Ecologies in the Atacama Desert," *International Development Policy*, no. 16 (April 2023): 16, <https://journals.openedition.org/poldev/5284>.

²⁵ Mary Menton and Philippe Le Billon, eds., *Environmental Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory* (Routledge, 2021).

Permisos Este es un punto de alta influencia porque la empresa todavía no ha invertido muchos recursos físicos en desarrollar el sitio y aún puede decidir retirarse, pero está motivada para llegar a un acuerdo a fin de evitar el riesgo de que los permisos se nieguen por la resistencia comunitaria. Los organizadores y defensores comunitarios han recalcado constantemente que las comunidades pueden participar más en el proceso de CBA si lo inician en las primeras etapas y maximizan su poder de negociación con información antes de que se otorguen los permisos y las empresas tengan la ventaja.



Desarrollo Una vez que ha comenzado la construcción, es posible que las comunidades tengan menos poder para detener el proyecto, pero pueden encontrar que la empresa está muy motivada a calmar la resistencia debido a la mayor cantidad de recursos ya invertidos en el proyecto. En este punto, el proyecto sigue siendo financieramente vulnerable, con inversionistas ya comprometidos. Cualquier retraso debido a litigios o acciones directas puede tener efectos significativos en la viabilidad económica.



Operación Una vez iniciada la operación, las coaliciones de comunidad y los trabajadores aún pueden organizarse para lograr convenios colectivos de trabajo y CBAs. Los trabajadores tienen el poder de retener su trabajo y hacer huelga, y las comunidades pueden cortar el flujo de bienes mediante bloqueos de carreteras y otras acciones directas. Las comunidades pueden tener más poder de negociación si hay planes de fusiones o adquisiciones, cambios en las empresas subcontratadas locales o ampliaciones del proyecto que requieran permisos adicionales.



Desmantelamiento El cierre de una instalación puede parecer un momento poco probable para una intervención eficaz. Sin embargo, si la persona dueña de la empresa tiene otros lugares y/o líneas de negocio, puede ser especialmente vulnerable y mostrarse abierta a negociar debido a inspecciones finales pendientes, avisos WARN (Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores) y la necesidad de financiar otros proyectos. La empresa también puede ser vulnerable porque tal vez no haya cumplido compromisos anteriores a la extracción y ya no cuenta con la promesa de empleos futuros para mantener en silencio a las y los funcionarios electos.

Desde la perspectiva corporativa y, con frecuencia, también gubernamental, la oposición mediante acción directa o litigio es un costo que debe reducirse y un riesgo que debe mitigarse o gestionarse. Pero desde la perspectiva de garantizar los mejores resultados para las comunidades, los paisajes y los ecosistemas, estas tácticas son herramientas vitales de rendición de cuentas social y pueden aportar una participación más significativa en la gobernanza. De hecho, en muchas jurisdicciones —donde faltan protecciones basadas en derechos o vías formales de participación— constituyen el único medio con el que cuentan las comunidades para expresar sus agravios.

Entre diferentes comunidades que enfrentan nuevos proyectos de desarrollo, existe un continuo de resistencia que va desde la oposición total hasta la negociación.

Entre diferentes comunidades que enfrentan nuevos proyectos de desarrollo, existe un continuo de resistencia que va desde la oposición total hasta la negociación. Algunos grupos comunitarios rechazan por completo un proyecto de desarrollo, mientras que otros no se oponen a la mina o al proyecto en sí, pero cuestionan aspectos específicos —ya sean económicos, ambientales, culturales o una combinación de estos temas.

En el caso de un grupo comunitario que se opone totalmente a un proyecto, el grupo puede exigir que el gobierno no otorgue, o que revoque, la concesión y/o los permisos de la empresa. El grupo puede recurrir a la protesta, la acción directa y el litigio. Esta forma más confrontativa de protesta se ha vuelto cada vez más común en los últimos años y es especialmente frecuente en América Latina.²⁶ En algunos casos, puede generar mayor poder de negociación para esfuerzos concurrentes o futuros.

En el caso de un grupo comunitario con preocupaciones sobre aspectos particulares de un proyecto, el grupo puede intentar entablar negociaciones con la empresa para exigir garantías en torno a las prioridades comunitarias, como la contratación local, oportunidades de empleo sindicalizado, una parte de las regalías, un diseño distinto del proyecto para reducir los impactos en el sistema de agua o en sitios sagrados, o un sistema de monitoreo más sólido. Si bien estas tipologías de movimientos sociales pueden ser útiles desde el punto de vista analítico, la realidad es, como es de esperarse, más desordenada. Estas dos orientaciones comunitarias no se excluyen mutuamente, y las comunidades deben entenderse como heterogéneas y no como bloques monolíticos.²⁷ En un contexto determinado, algunos residentes pueden inclinarse por el rechazo total y recurrir a acciones directas como bloqueos y ocupaciones, mientras que otras pueden priorizar la obtención del mejor acuerdo

²⁶ Begüm Özkaynak et al., *Towards Environmental Justice Success in Mining Conflicts: An Empirical Investigation*, no. 14 (EJOLT, 2015), 1–96, http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/EJOLT_14_Towards-EJ-success-mining-low.pdf; Philippe Le Billon and Päivi Lujala, "Environmental and Land Defenders: Global Patterns and Determinants of Repression," *Global Environmental Change* 65 (November 2020): 102163, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102163>; "Environmental Activists: Land and Environmental Defenders," Global Witness, accessed February 6, 2025, <https://en/campaigns/environmental-activists/>.

²⁷ J. Peter Brosius et al., "Representing Communities: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management," *Society and Natural Resources* 11 (1998): 157–68; Michael Watts, "Antinomies of Community: Some Thoughts on Geography, Resources and Empire," *Transactions of the Institute of British Geographers* 29, no. 2 (2004): 195–216; Marcela Torres-Wong and Adrian Jimenez-Sandoval, "Indigenous Resource Governance as an Alternative to Mining: Redefining the Boundaries of Indigenous Participation," *The Extractive Industries and Society* 9 (March 2022): 101001, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101001>.

La evidencia sugiere que, en las luchas sobre extracción y desarrollo energético, la resistencia organizada puede pasar de la oposición a la negociación, regresar a la oposición y repetir el ciclo.

posible con una empresa poderosa. Estas orientaciones también se mezclan con el tiempo: no es raro que grupos comunitarios organizados rechacen un proyecto en su forma actual, pero luego giren hacia la negociación, ya sea porque el proyecto avanza a pesar de su oposición o porque perciben una oportunidad con funcionariado gubernamental más afín. Las corporaciones también pueden cooptar movimientos sociales y silenciar la resistencia respaldando contraprotestas en nombre de la seguridad, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.²⁸

También puede ocurrir la trayectoria opuesta. Los grupos comunitarios pueden comenzar intentando negociar y después perder la confianza en que los interlocutores de la empresa y/o del gobierno estén negociando de buena fe. Por ejemplo, los grupos comunitarios pueden quedar excluidos de reuniones importantes, percibir que las deliberaciones son superficiales o enterarse de nuevos detalles sobre impactos ambientales, beneficios económicos prometidos, el historial de comportamiento previo de la corporación o cabildeo corporativo que les genera suspicacias. En esos casos, como en la saga en curso de la expansión de la minería de litio en el Desierto de Atacama que se analiza en la siguiente sección, las organizaciones comunitarias pueden abandonar las negociaciones y recurrir a tácticas más combativas para ejercer nueva presión sobre representantes de la empresa o funcionariado gubernamental. En este punto, también pueden intentar ampliar su coalición, por ejemplo, acercándose a grupos de defensa ambiental o redes transnacionales para amplificar su campaña contra la mina. La evidencia sugiere que, en las luchas sobre extracción y desarrollo energético, la resistencia organizada puede pasar de la oposición a la negociación, regresar a la oposición y repetir el ciclo. A veces el proceso se prolonga tantos años que los inversionistas pierden interés, lo que paraliza el proyecto de facto hasta que, y a menos que, una nueva empresa exprese interés.

²⁸ Kirsch, *Mining Capitalism*; Marina Welker, *Enacting the Corporation: An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia* (University of California Press, 2014).

Las comunidades logran mejores resultados cuando están organizadas y movilizadas lo antes posible en el proceso.

Independientemente del repertorio específico de acciones contenciosas, las ideas generales de la literatura sobre movimientos sociales se aplican a los conflictos en torno a la energía y la extracción. Las comunidades logran mejores resultados cuando están organizadas y movilizadas lo antes posible en el proceso, identifican sus fuentes de poder estratégico, utilizan simultáneamente una variedad de tácticas de presión, impulsan la educación popular sobre la mina y sus impactos, cuentan con el apoyo de organizaciones aliadas y de liderazgos políticos alineados, identifican las oportunidades en la estructura de oportunidad política y se enfrentan a élites débiles o fragmentadas. Ya sea que su objetivo sea detener la mina u obtener más empleos, proteger el sistema de agua o aumentar los ingresos locales, estos son los métodos probados de los movimientos sociales que se basan en construir poder comunitario.²⁹ Como corolario, los CBAs que son resultado de procesos de lucha y empoderamiento como estos pueden ser más sólidos, incluso en su aplicación y cumplimiento, que aquellos que surgen por iniciativa de la corporación con el objetivo de acallar preocupaciones o impresionar a inversionistas o funcionariado estatal. Los CBAs que se originan en la acción colectiva siguen teniendo riesgos si se rompe la confianza o esta se vuelve más difícil de construir, pero la organización de base es fundamental para que las comunidades marginadas puedan moldear e incluso transformar las relaciones de poder profundamente asimétricas que se dan en los sectores energético, extractivo y manufacturero.

Disposiciones comunes de los CBAs

Los CBAs son instrumentos dinámicos, flexibles y pueden diferir de manera significativa según el contexto. En cualquier eslabón de la cadena de suministro, los CBAs sólidos deben ofrecer una

²⁹ Marc Edelman, "Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics," *Annual Review of Anthropology* 30 (2001): 285–317; Bebbington et al., "Mining and Social Movements"; Carwil Bjork-James et al., "Transnational Social Movements: Environmentalist, Indigenous, and Agrarian Visions for Planetary Futures," *Annual Review of Environment and Resources* 47, no. 1 (2022): 583–608, <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-112320-084822>; James J. A. Blair et al., "From Watershed Moment to Hydrosocial Movement: Patagonia Without Dams and the Free-Flowing Rivers Network in Chile," *Human Organization* 82, no. 3 (2023): 288–303, <https://doi.org/10.17730/1938-3525-82.3.288>.

combinación de disposiciones basadas en las prioridades locales que más importan para las personas de la comunidad. Con base en una revisión de CBAs a lo largo de la cadena de suministro, a continuación, hemos categorizado temáticamente las disposiciones generales que contienen y ofrecemos ejemplos de un conjunto más amplio de acuerdos.



Gobernanza

Las comunidades tienen el poder de establecer las condiciones y gestionar los resultados de los CBAs. Históricamente, los CBAs se han entendido como acuerdos jurídicamente vinculantes entre una desarrolladora y una comunidad, pero con una participación algo limitada por parte del gobierno. Distintos niveles de gobierno han comenzado a introducir lineamientos de política pública para los CBAs que pueden facilitar el acceso a financiamiento para el desarrollo. Sin embargo, cuando los gobiernos están capturados por la industria, los CBAs no vinculantes o las políticas de “buena vecindad” pueden diluirse. A través de una participación comunitaria y un trabajo de alcance proactivo, las coaliciones comunitarias y las empresas pueden negociar CBAs con o sin participación de gobiernos locales, estatales o federales. Las comunidades pueden definir el alcance de un CBA y tomar decisiones colectivas sobre cómo se administra. Las disposiciones de gobernanza permiten que las comunidades aporten opiniones sobre el diseño y la gestión de los proyectos, y pueden incluir las que se enumeran en la siguiente tabla.

Ejemplos Seleccionados de Disposiciones de Gobernanza

Reconocimiento de los derechos indígenas, los recursos culturales tribales y las obligaciones asociadas al FPIC

The Western Cape Communities Co-Existence Agreement, Ely Bauxite Mining Project Agreement y el Weipa Township Agreement entre Rio Tinto y 12 grupos aborígenes “propietarios tradicionales” reconocen el título indígena sobre la tierra en la que opera la mina de Rio Tint.³⁰

³⁰ The University of Melbourne, “Comalco Indigenous Land Use Agreement (ILUA) (Western Cape Communities Co-Existence Agreement).”

**Identificación de
representantes y de las
autoridades de toma de
decisiones del CBA**

En Nashville, Tennessee, un “Acuerdo de Beneficios Comunitarios” que abarca el sitio de un nuevo estadio de Major League Soccer instruyó a las partes firmantes a establecer un “Comité Asesor Comunitario” de seis integrantes, que incluye dos representantes de la desarrolladora, dos representantes de una coalición comunitaria y dos residentes de cada una de las dos “zonas de promesa” adyacentes afectadas que albergan el desarrollo. En conjunto, el Comité funciona como órgano de toma de decisiones para implementar el CBA y garantizar el cumplimiento de sus disposiciones.³¹

**Duración del CBA,
enmiendas y fecha de
vencimiento**

En 2011, una división de Chevron Corporation y la City of Richmond firmaron el “Environmental and Community Investment Agreement” para abordar asuntos relacionados con un importante proyecto de modernización en la refinería de petróleo de Chevron en Richmond, California. El Acuerdo estableció una vigencia de 10 años a partir de la operación de una nueva planta o un periodo durante el cual Chevron debía pagar a la Ciudad de Richmond \$3 millones anuales en diez cuotas, lo que fuera más prolongado.³²

**Descripción de los
procesos de toma de
decisiones, los informes
y los requisitos de
reuniones**

El “Acuerdo de Beneficios Comunitarios” de L.A. Live/Staples Center entre las desarrolladoras LA Arena Land Company y Flower Holdings, LLC, y una coalición de más de 20 grupos comunitarios, estableció un calendario de reuniones trimestrales de su “Comité Asesor”. Durante estas reuniones, las desarrolladoras debían solicitar la opinión de la comunidad sobre el proyecto y sobre la implementación del CBA.³³

**Referencia cruzada a
acuerdos entre
empleadores y sindicatos
o a planes de desarrollo
comunitario**

El Artículo IX del acuerdo de 2022 entre Greater Birmingham Ministries (GBM), Jobs to Move America (JMA) y la empresa fabricante de autobuses eléctricos New Flyer, para sus instalaciones en Anniston, Alabama, establece que un acuerdo entre empleadores y sindicatos, como un convenio colectivo de trabajo,

³¹ Stand Up Nashville and Nashville Soccer Holdings, LLC, “Nashville MLS Soccer Community Benefits Agreement,” September 3, 2018, <https://mediaassets.wcpo.com/html/pdfs/MLS-CBAs/NashvilleCommunityBenefitsAgreement.pdf>.

³² City of Richmond, California and Chevron Products Company, a Division of Chevron U.S.A. Inc., “CHEVRON REFINERY MODERNIZATION PROJECT ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY INVESTMENT AGREEMENT.”

³³ Figueroa Corridor Coalition for Economic Justice et al., “Attachment A: Community Benefits Program,” May 29, 2001, https://juliangross.net/wp-content/uploads/2024/09/Staples_CBA.pdf.

prevalecerá siempre que exista un conflicto en algún término, derecho u obligación bajo el acuerdo.³⁴



Finanzas

Las comunidades tienen el poder de negociar CBAs que vayan más allá de los apoyos corporativos de “paga para participar”, con ingresos reservados para usos relacionados. Los ejemplos actuales de CBAs y sus enfoques fiscales para la distribución de beneficios deben considerarse como un piso, y no como un techo, para la redistribución de regalías. Los diferentes acuerdos financieros que resultan de los CBAs pueden incluir los que aparecen en la siguiente tabla.

Ejemplos Seleccionados de Disposiciones Financieras

Pagos directos (únicos o recurrentes)

Bajo un “Acuerdo de la Comunidad Anfitriona” con la Ciudad de East Hampton y los Trustees of the Freeholders and Commonalty of the Town of East Hampton, la empresa desarrolladora de energía eólica marina South Fork Wind pagó a la Ciudad y a los fideicomisarios \$500,000 dentro de los 90 días posteriores a la firma del acuerdo. South Fork Wind también acordó pagar a la Ciudad y a los fideicomisarios anualmente durante 25 años, comenzando con un pago de \$700,000 dentro de los 6 meses posteriores a que la planta eólica entre en plena operación y aumentando este pago en 2% cada año.³⁵

Subvenciones para necesidades comunitarias definidas (p. ej., infraestructura, parques, becas, vivienda asequible, educación de la primera infancia, gestión de residuos, etc.)

Un “Acuerdo Comunitario” entre la empresa minera Perpetua Resources Corp. y múltiples municipalidades cercanas en el centro de Idaho instruyó a la empresa a crear un fideicomiso de beneficencia, la Stibnite Foundation, para otorgar subvenciones a organizaciones locales sin fines de lucro y a las propias municipalidades. Al inicio de las operaciones mineras de Perpetua, la empresa

³⁴ New Flyer of America Inc. et al., “Community Benefits Agreement,” May 24, 2022, https://jobstomoveamerica.org/wp-content/uploads/2023/02/CBA_05-24-2022_New-Flyer-Executed.pdf.

³⁵ South Fork Wind, LLC et al., “Host Community Agreement,” December 14, 2020, <https://ehamptonny.gov/DocumentCenter/View/6969/South-Fork-Wind-Host-Community-Agreement—Updated-12-14-20>.

Cuentas de fideicomiso o fondos de beneficios comunitarios administrados por un tercero para el manejo del dinero

ofrecerá un mínimo de \$500,000 anuales en fondos de subvenciones.³⁶

Vea también: Chevron Modernization Project Environmental and Community Investment Agreement, Richmond, California. Este acuerdo apoya tanto programas educativos como el monitoreo ambiental y de salud pública, debido a que se trata de una instalación con altos niveles de contaminación.³⁷

Como parte del “paquete de beneficios integrados”, los habitantes de la isla de Lihir, en Papúa Nueva Guinea, son beneficiarias de una cuenta de fideicomiso creada por la empresa minera de oro Lihir Gold Ltd. De 2006 a 2011, la empresa aportó aproximadamente \$35 millones al fideicomiso. Una parte del fideicomiso se destina a proyectos comunitarios.³⁸

Propiedad parcial o participación en las utilidades de las operaciones con medidas de mitigación del riesgo y la responsabilidad (p. ej., acciones gratuitas o préstamos sin intereses)

A través de Morongo Transmission LLC, la Morongo Band of Mission Indians es parte inversionista en una línea de transmisión. La empresa de servicios públicos realiza pagos directos a la tribu, lo que amplía la capacidad de la tribu para construir, poseer y suministrar energía solar, eólica y de baterías a la red eléctrica de Southern California Edison (SCE). SCE también transfiere ahorros en los costos de energía a los miembros de la tribu.³⁹ El proyecto se completó en 2021, lo que convirtió a la Morongo Band of Mission Indians en la primera Tribu Nativa Americana aprobada como “propietaria participante de la red de transmisión” en Estados Unidos.⁴⁰

³⁶ “Community Agreement Effective This 30th Day of November, 2018 among the Cities of Cascade, Council, Donnelly, McCall, New Meadows, and Riggins and the Village of Yellow Pine and Adams, Idaho and Valley Counties and Midas Gold.”

³⁷ City of Richmond, California and Chevron Products Company, a Division of Chevron U.S.A. Inc., “CHEVRON REFINERY MODERNIZATION PROJECT ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY INVESTMENT AGREEMENT.”

³⁸ “Integrated Benefits Package Revised Agreement Between Lihir Gold Limited and The People of Lihir Represented by: The Lihir Mining Area Landowners Association Inc. and The Nimamar Rural Local-Level Government,” 2007, <https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/aa6595f8d634a7ab6e83dd00a8711306d8ff5b8e.pdf>.

³⁹ Ung-Kono, *Clean Energy Transmission: National Wildlife Federation’s Toolkit for Community Participation*.

⁴⁰ Morongo Band of Mission Indians, *Morongo Becomes First Native American Tribe to Be Approved as a Participating Transmission Owner in Nation*.

Ingresos diversificados con pagos fijos y regalías sobre los productos producidos o extraídos (p. ej., kWh de energía, toneladas de cobre, porcentaje de los ingresos, etc.)

El Acuerdo de Raglan, firmado en 1995 por cinco diferentes comunidades inuit y la mina de níquel Raglan, actualmente operada por Glencore en la región de Nunavik, Quebec, establece pagos fijos individuales y múltiples que aumentan a lo largo de la vida del proyecto, así como una participación anual en las utilidades de 4.5%.⁴¹

Véase también: Bajo un "Acuerdo de Distribución de Beneficios", 18 comunidades atacameñas y la organización sin fines de lucro Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) en Chile reciben 3.5% de los ingresos de Albemarle por la extracción de litio en el salar de Atacama. Tres por ciento de los ingresos se divide entre las 18 comunidades y el CPA. El medio punto porcentual restante se destina al CPA para estudios, planes, programas de emprendimiento indígena y la creación de una unidad de monitoreo ambiental.⁴²



Trabajo

Las comunidades tienen el poder de construir una fuerza laboral local y generar desarrollo económico duradero a través de los CBAs. Los CBAs que garantizan empleos bien remunerados, incluidos empleos sindicalizados, para la operación y el mantenimiento pueden traer beneficios más duraderos que los Acuerdos Laborales de Proyecto (PLAs, por sus siglas en inglés), que normalmente se establecen para la etapa de construcción de un proyecto. Las disposiciones laborales en los CBAs tienen la capacidad de aportar beneficios más permanentes a la fuerza laboral local y de fortalecer el poder de los trabajadores a lo largo de las diferentes etapas de la cadena de suministro. Estas disposiciones pueden incluir las que se presentan en la siguiente tabla.

⁴¹ Simon Fraser University, "Impact Benefit Agreement Database."

⁴² "Convenio de Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo Entre Consejo de Pueblos Atacameños, Comunidad Indígena Atacameña De Río Grande y Otras y Rockwood Litio LTDA.," February 21, 2016, https://www.chululo.cl/incs/docs/convenio_rockwood_cpa_2016_02_21_.pdf.

Ejemplos Seleccionados de Disposiciones Laborales

Empleos de alto estándar que permitan sostener a una familia, con prácticas equitativas de contratación y promoción para eliminar barreras para los trabajadores locales (es decir, transporte y cuidado infantil); compromisos salariales con neutralidad sindical.

En Nashville, Nashville Soccer Holdings (NSH), la desarrolladora de un nuevo estadio de Major League Soccer, acordó establecer un "Programa de Contratación y Desarrollo de la Fuerza Laboral" bajo un "Acuerdo de Beneficios Comunitarios" con Stand Up Nashville, una organización local sin fines de lucro. El programa exige que NSH considere primero a solicitantes de las "zonas de promesa" de Nashville determinadas a nivel federal, antes que a otros candidatos, para vacantes en servicios al público (incluida taquilla, venta de boletos, acomodadores y personal de atención), trabajos de limpieza, custodia y mantenimiento, y mantenimiento de cancha, y que pague a dichos empleados al menos \$15.50 por hora.⁴³

Vea también: L.A. Live community benefits agreement, Los Angeles, California.⁴⁴

Salud y seguridad relacionadas con el trabajo

El acuerdo de 2022 entre Greater Birmingham Ministries (GBM), Jobs to Move America (JMA) y la empresa fabricante de autobuses eléctricos New Flyer, para sus instalaciones en Anniston, Alabama, incluye la participación en un comité de salud ambiental enfocado en asuntos de seguridad para los trabajadores, así como capacitación independiente en seguridad impartida por una persona experta externa.⁴⁵

Compromisos para buscar contratos con empresas comerciales locales en desventaja

En Morro Bay, California, Castle Wind, desarrolladora de un parque eólico marino propuesto, firmó un "Acuerdo de Beneficios Comunitarios" con dos asociaciones locales de pescadores. En virtud del Acuerdo, dichas asociaciones de pescadores obtuvieron el derecho de primera oferta para proporcionar ciertos servicios calificados a Castle Wind durante la construcción y operación del proyecto eólico marino. El parque eólico propuesto nunca se concretó porque Castle Wind fue superada en la puja por una concesión eólica marina con la Oficina de

⁴³ Stand Up Nashville and Nashville Soccer Holdings, LLC, "Nashville MLS Soccer Community Benefits Agreement."

⁴⁴ Figueroa Corridor Coalition for Economic Justice et al., "Attachment A: Community Benefits Program."

⁴⁵ New Flyer of America Inc. et al., "Community Benefits Agreement."

Administración de Energía Oceánica en una subasta para las áreas designadas.⁴⁶

Capacitación de la fuerza laboral, incluida la capacitación en el trabajo y requisitos de utilización de programas de aprendizaje

En 2017, Jobs to Move America (JMA) ayudó a conformar una coalición entre comunidad y sindicatos que dio como resultado un CBA entre la Asociación Internacional del Metal, el Aire, el Ferrocarril y el Transporte (SMART, por sus siglas en inglés) y la empresa fabricante de autobuses eléctricos BYD, para programas de aprendizaje y preaprendizaje en empleos en la planta de BYD en Lancaster, California. Esto derivó en la obtención de alrededor de \$1 millón provenientes de California's High Road Training Partnership (H RTP).⁴⁷



Medio ambiente

Las comunidades tienen el poder de exigir que las disposiciones de los CBAs vayan más allá de las regulaciones y medidas de mitigación requeridas, para seguir principios de justicia ambiental que busquen beneficios ambientales netos y la revitalización cultural. Los CBAs nunca sustituyen evaluaciones adecuadas de impacto ambiental. Estos son procesos distintos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, los CBAs pueden nutrirse del proceso de planificación y complementarlo; las comunidades ya sobrecargadas pueden enterarse de los posibles impactos únicamente a través del proceso de permisos. Las comunidades pueden usar los CBAs para acceder a información desde etapas tempranas del proceso y proponer soluciones a preocupaciones no resueltas que vayan más allá de la simple evitación, minimización y mitigación de impactos ambientales requeridos. Ya sea que estas soluciones sean estrechas o integrales, es fundamental que los CBAs no se limiten a trasladar las cargas ambientales de un lugar a otro, y de una comunidad a otra. Los fondos pueden usarse para limpiar sitios contaminados en el pasado y apoyar la conservación encabezada por pueblos indígenas, la evaluación de impactos, la revitalización cultural y programas de

⁴⁶ City of Morro Bay and Castle Wind LLC, "Community Benefits Agreement Castle Wind Morro Bay Offshore Wind Farm Project," November 29, 2018, <https://climate.law.columbia.edu/sites/climate.law.columbia.edu/files/content/CBAs/08.%20Morro%20Bay%20Executed.pdf>.

⁴⁷ "BYD Apprenticeship Readiness Training."

monitoreo Guardian. Las disposiciones ambientales pueden incluir las que se muestran en la siguiente tabla.

Ejemplos Seleccionados de Disposiciones Ambientales

Prohibiciones de prácticas específicas de desarrollo

En el centro de Montana, Sandfire Resources, una corporación minera australiana, está construyendo su Black Butte Copper Project. En virtud de un "Acuerdo de Prácticas Mineras" entre Sandfire y el Concejo de Administración del Condado de Meagher, un grupo comunitario local, la empresa se comprometió a no realizar minería a cielo abierto en ninguna fase del proyecto ni en ningún predio de tierra dentro de sus operaciones.⁴⁸

Beneficios netos positivos más allá de la mitigación compensatoria

Negociado entre una desarrolladora y una coalición de más de 20 organizaciones comunitarias, el "Acuerdo de Beneficios Comunitarios" que abarca el Los Angeles Sports and Entertainment District Project (adyacente al Staples Center) en el centro de Los Ángeles exigió que la desarrolladora construyera áreas verdes y espacios públicos abiertos como parte de la construcción del proyecto. Las organizaciones comunitarias identificaron el Figueroa Corridor, el vecindario anfitrión del proyecto, como una zona que contaba con menos de una cuarta parte de las hectáreas de parques requeridas por la Ciudad. Con las disposiciones del Acuerdo relativas a los espacios verdes, los esfuerzos de construcción de parques buscaron reducir este déficit.⁴⁹

Requisitos de monitoreo y transparencia de la información, con sanciones por contaminación y remediación

El "Acuerdo de Buena Vecindad" entre el Consejo de Recursos de las Llanuras del Norte, un grupo conservacionista de base, y Sibanye-Stillwater, una corporación minera multinacional, abarca dos minas de platino/paladio en el centro-sur de Montana. El Acuerdo estableció un "Programa Integral de Protección de Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas y Recursos Acuáticos", que implica un monitoreo continuo de la calidad del agua para contaminantes conocidos con base en líneas de

⁴⁸ Sandfire Resources America Inc. and Meagher County Stewardship Council, "Mining Practices Agreement," April 26, 2019, https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/mcsc-5c727.appspot.com/o/MiningPracticesAgreement_4.26.19_signed.pdf?alt=media&token=5c675850-13fe-4223-bd04-ed56e5b955c2.

⁴⁹ Figueroa Corridor Coalition for Economic Justice et al., "Attachment A: Community Benefits Program."

Financiamiento de estudios de terceros y fortalecimiento de capacidades para analizar los impactos del proyecto

referencia científicamente establecidas —más estrictas que los requisitos de la ley estatal de Montana— y ordena acciones de remediación hasta un nivel de financiamiento definido cuando se exceden los límites de contaminantes. El programa está supervisado por un comité de vigilancia con representantes tanto de las Llanuras del Norte como de Sibanye-Stillwater, que en conjunto revisan el programa de calidad del agua y aprueban cualquier medida de remediación.⁵⁰

Vea también: Los Angeles World Airports and LAX Coalition Community Benefits Agreement.⁵¹

El “Acuerdo de Buena Vecindad” entre el Consejo de Recursos de las Llanuras del Norte y Sibanye-Stillwater (véase arriba) instruye a Sibanye-Stillwater a financiar anualmente estudios de terceros para evaluar las poblaciones de peces en los tramos inferiores de los ríos Stillwater y Boulder, las cuencas en las que la empresa realiza actividades mineras. Ambos ríos son arroyos trucheros de primera categoría y recorridos de rápidos muy conocidos que son importantes para la economía turística local.⁵²

Planes para la reducción gradual de operaciones y cierre mediante desmantelamiento

En el “Acuerdo Ambiental” del año 2000 que abarca la Diavik Diamond Mine de DDMI (véase arriba), se exigió a DDMI preparar y presentar un Plan de Recuperación y Abandono de conformidad con la ley federal canadiense, y proporcionar al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte (un órgano del gobierno federal de Canadá) \$15 millones en un “depósito de garantía” inicial, seguido de aportaciones anuales que, en conjunto, sumaran un monto igual al costo estimado de la rehabilitación y el cierre de la mina en cualquier año de operación. También se exigió a DDMI que proporcionara financiamiento para un “depósito de garantía adicional” disponible para el gobierno federal en caso de incumplimiento por parte

⁵⁰ “Good Neighbor Agreement between Stillwater Mining Company and Northern Plains Resource Council, Cottonwood Resource Council and Stillwater Protective Association”; Sibanye-Stillwater, *US PGM Factsheet: The Good Neighbor Agreement*.

⁵¹ Los Angeles World Airports and LAX Coalition, “Community Benefits Agreement: LAX Master Plan Program,” 2004, https://www.lawa.org/sites/lawa/files/documents/LAX_CBA_Final.pdf.

⁵² “Good Neighbor Agreement between Stillwater Mining Company and Northern Plains Resource Council, Cottonwood Resource Council and Stillwater Protective Association”; Sibanye-Stillwater, *US PGM Factsheet: The Good Neighbor Agreement*.

de DDMI, contingencias u otras responsabilidades ambientales inesperadas.⁵³



Aplicación y cumplimiento

Las comunidades tienen el poder de exigir la rendición de cuentas de las empresas y los gobiernos a través de los CBAs. Los CBAs representan la culminación de un complejo proceso de negociación, pero formalizan una relación continua entre comunidades y empresas que no siempre será armoniosa. Si bien el Estado es un respaldo importante para mantener a la industria en cumplimiento, los CBAs también pueden utilizarse para llenar los vacíos cuando las políticas gubernamentales carecen de fuerza y no cumplen con el interés público. Por ello, los mecanismos sólidos de aplicación y cumplimiento con medidas específicas de rendición de cuentas son fundamentales para cualquier CBA. Las disposiciones de aplicación y cumplimiento pueden incluir las que se presentan en la siguiente tabla.

Ejemplos Seleccionados de Disposiciones de Aplicación y Cumplimiento

Proceso de resolución de disputas y/o cláusula(s) de arbitraje

Un “Acuerdo de la Comunidad Anfitriona” entre la empresa desarrolladora de energía eólica marina Vineyard Wind y la Ciudad de Barnstable, Massachusetts, estableció un proceso de resolución de disputas en caso de conflicto entre las partes. La resolución establece plazos para solicitar un proceso de mediación, seleccionar a una persona mediadora y describe las opciones en caso de que la mediación no tenga éxito. El marco solo permite recurrir a un recurso judicial (es decir, litigio) después de que se hayan agotado todas las demás opciones, incluida la mediación.⁵⁴

Transparencia, requisitos obligatorios de intercambio de datos y

El acuerdo de 2022 entre Greater Birmingham Ministries (GBM), Jobs to Move America (JMA) y la

⁵³ “Environmental Agreement Between: Her Majesty the Queen in Right of Canada and the Government of the Northwest Territories and Diavik Diamond Mines Inc. and Dogrib Treaty 11 Council and Lutsel K’e Dene Band and Yellowknives Dene First Nation and 2 North Slave Métis Alliance and Kitikmeot Inuit Association,” March 8, 2000, <https://database.atns.net.au/agreement.asp?EntityID=1873&SubjectMatter=24>.

⁵⁴ Town of Barnstable and Vineyard Wind LLC, “Host Community Agreement,” 2018, <https://vineyardwind.app.box.com/s/efzup1n6isjrifyflojehy8a9f70e5am>.

**de informes, y
descripción de sanciones
u obligaciones legales
por no cumplir el CBA**

empresa fabricante de autobuses eléctricos New Flyer, para sus instalaciones en Anniston, Alabama, incluye un lenguaje detallado sobre transparencia y rendición de cuentas, incluida la manera en que ciertas disposiciones del acuerdo pueden modificarse y renunciarse sin que ello constituya una renuncia a ninguna de las otras disposiciones.⁵⁵

**Identificación de los
roles y responsabilidades
de las organizaciones
que son parte del
acuerdo**

En Menlo Park, California, un “Pacto Comunitario” entre Facebook y una coalición de organizaciones comunitarias locales estipula claramente los compromisos de cada parte como parte del Pacto, la creación de un grupo de trabajo con representación equitativa de ambas partes y una cláusula de aplicación y cumplimiento claramente definida.⁵⁶

**Asunción de las
obligaciones
contractuales en caso de
adquisición, bancarrota,
ejecución hipotecaria,
etc.**

Un “Acuerdo de la Comunidad Anfitriona” entre la Ciudad de Portsmouth, RI y SouthCoast Wind, una desarrolladora de energía eólica marina, incluye lenguaje que aclara que el Acuerdo es vinculante para ambas partes, sus respectivas afiliadas, sucesoras y cesionarias.⁵⁷

**Capacidad de reabrir o
renegociar el acuerdo en
función de la revisión
ambiental**

El Chevron Modernization Project Environmental and Community Investment Agreement en Richmond, California, se renegocia al renovarse los permisos de operación clave con la ciudad.⁵⁸

Estrategias clave para la negociación de CBAs

- **Organizarse y actuar para aportar comentarios significativos de manera temprana y frecuente.** Cuanto más pronto se organice una comunidad, más efectivas pueden ser sus acciones. Los proyectos extractivos y energéticos tienen un periodo de preparación largo, que incluye conseguir suficiente inversión financiera. Las audiencias públicas tempranas, así como las

⁵⁵ New Flyer of America Inc. et al., “Community Benefits Agreement.”

⁵⁶ Community Groups et al., “Compact to Increase Equity, Opportunity and Access in Silicon Valley,” November 23, 2016, <https://www.youthunited.net/what-we-got-goin-on/2016/12/16/etb-fb-community-compact>.

⁵⁷ Town of Portsmouth and SouthCoast Wind Energy LLC, “Host Community Agreement,” 2024, <https://climate.law.columbia.edu/sites/climate.law.columbia.edu/files/content/CBAs/Portsmouth%20-%20SouthCoast%20HCA.pdf>.

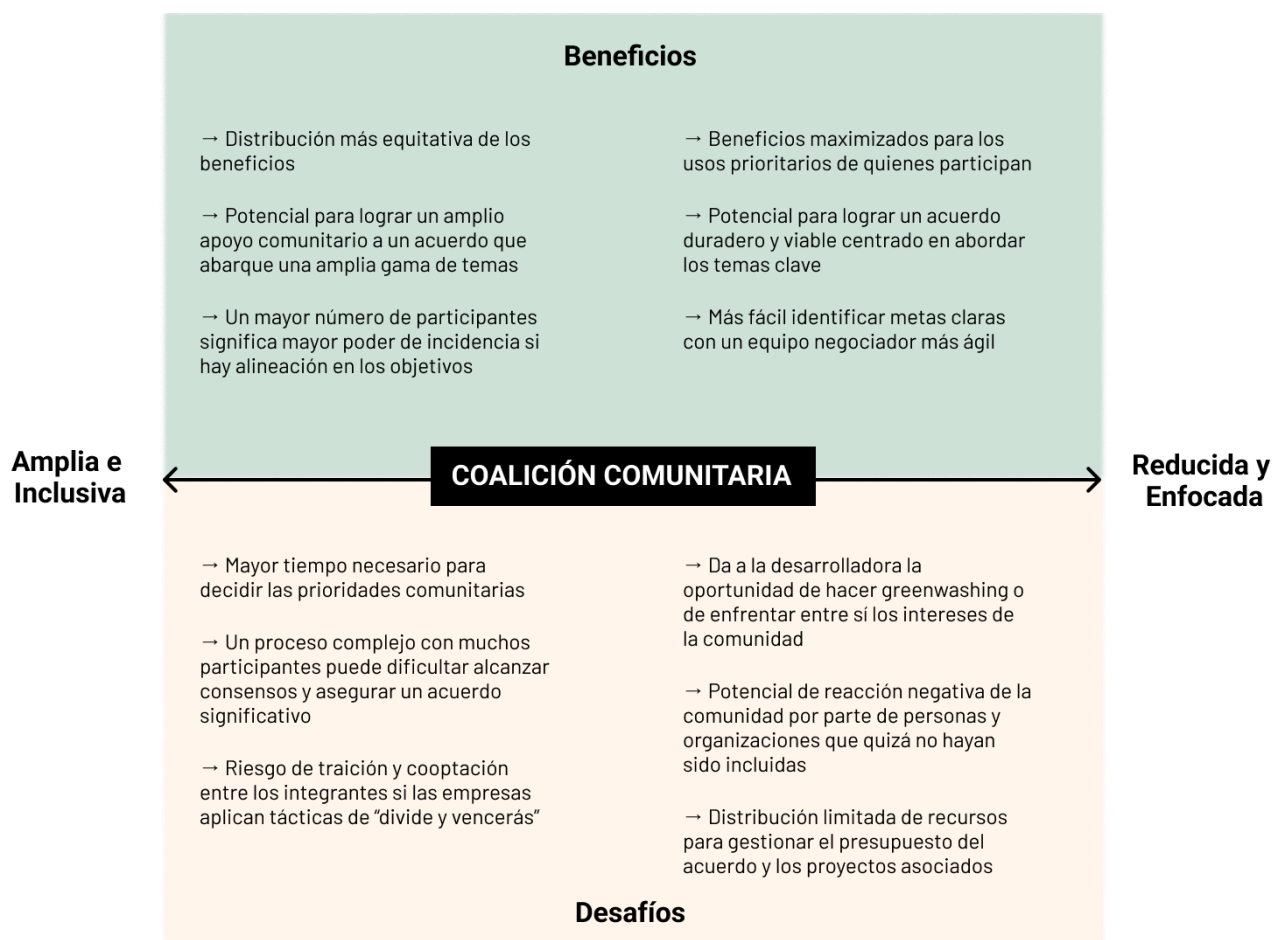
⁵⁸ City of Richmond, California and Chevron Products Company, a Division of Chevron U.S.A. Inc., “CHEVRON REFINERY MODERNIZATION PROJECT ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY INVESTMENT AGREEMENT.”

decisiones iniciales sobre permisos, son momentos críticos para la viabilidad de un proyecto y, por lo tanto, momentos especialmente oportunos para que las comunidades se organicen, recopilen información, consulten a personas expertas y hagan oír su voz. Esto puede implicar construir una coalición de base o crear una junta asesora formal de beneficios comunitarios compuesta por perspectivas diversas pero complementarias, incluyendo —aunque no únicamente— tribus, grupos de justicia ambiental, laborales, de justicia racial y de fe. La adopción temprana de una política de beneficios comunitarios puede permitir que las comunidades eviten pelear batalla por batalla en cada proyecto y, en cambio, actuar de manera más sistemática.

- **Tener cuidado con la mitigación disfrazada de beneficio comunitario.** Durante las negociaciones, los representantes de la comunidad pueden dejar claro cuáles elementos son (1) medidas básicas de mitigación compensatoria, que deben ser responsabilidad de la empresa para reducir o neutralizar los impactos del proyecto en el suministro de agua, la calidad del aire, el tráfico, el mantenimiento de la infraestructura u otros recursos comunitarios; y cuáles elementos son (2) beneficios comunitarios, que compensan a la comunidad por encima y más allá de esas mitigaciones básicas. No hacer esta distinción puede dar lugar a un CBA debilitado que no protege a las comunidades del daño ni contribuye al beneficio comunitario en general (vea el caso de Imperial Valley).
- **Adoptar un enfoque intencional de inclusión, ya sea para una coalición amplia o una más estrecha.** Las mejores prácticas suelen sugerir que un proceso amplio e inclusivo permite a las comunidades construir una coalición que represente de mejor manera los intereses de sus miembros diversos (como en los ejemplos de L.A. Live u offshore wind en el condado de Humboldt). El proceso de negociación en estos casos puede ser complejo y es posible que llegar a consensos implique un reto, por lo que se deben establecer estructuras democráticas que permitan a un pequeño número de representantes comunitarios negociar con transparencia y tomar decisiones informadas. Algunos grupos pueden optar por mantenerse ágiles en la negociación para priorizar sus demandas mediante una

coordinación estrecha, sin formar una coalición amplia, decidiendo intencionalmente no expandirse para incluir a muchos grupos distintos con intereses potencialmente divergentes (como en el caso de Montana). Esto puede generar beneficios duraderos para algunas personas de la comunidad, pero también corre el riesgo de marginar a otras partes que podrían tener intereses o preocupaciones válidas. Existe un espectro entre inclusión y exclusión que tiene implicaciones para la complejidad de la negociación, los tiempos, el poder comunitario y la distribución equitativa de los beneficios. Los grupos deben tener una intención al decidir en qué punto de ese espectro estarán mejor posicionados para alcanzar sus metas, considerando las circunstancias locales.

Espectro de Inclusión en las Coaliciones



- **Participar en grupos asesores comunitarios.** A pesar de la tendencia común de que los grupos asesores comunitarios tengan un sesgo a favor de la empresa, la participación puede generar resultados positivos cuando forman parte del proceso de planificación, incluso si no se traducen de inmediato en inversiones de beneficios comunitarios. En el ejemplo de Patagonia, Arizona, este tipo de foro —aunque se creó para servir a la agenda de la empresa— dio a las personas de la comunidad la oportunidad de interactuar con la compañía mientras desarrollaban un entendimiento común de los problemas y construían solidaridad hacia una posición comunitaria más unificada.
- **Empoderar a líderes locales de confianza para que asuman el papel de negociadores.** Las personas negociadoras necesitan actuar como representantes legítimas de los intereses y deseos de la comunidad. Delegar la negociación de beneficios en consejos electos puede, en teoría, brindar rendición de cuentas democrática y permitir que los grupos comunitarios mantengan su independencia para oponerse y litigar contra la empresa si fuera necesario (como en el ejemplo de Patagonia, Arizona). Esto requiere que exista confianza entre el gobierno local y los grupos comunitarios, cosa que no ha sucedido en otros lugares, como Imperial Valley, California, donde Imperial County, capturado por la industria, ha sido en gran medida adversarial con las organizaciones de justicia ambiental y las tribus. En ese caso, puede ser mejor que las coaliciones comunitarias construyan suficiente poder para negociar directamente con la desarrolladora.
- **Encontrar una organización estable y con recursos para anclar el proceso.** Ya sea para negociar, litigar o protestar, el proceso de involucrarse con un proyecto minero o de desarrollo energético probablemente será de años y requerirá muchos recursos. Muchas tribus pequeñas o grupos comunitarios no cuentan con los recursos financieros, de personal o de conocimiento especializado necesarios para sostener estos esfuerzos y tener éxito por sí solos. Organizaciones translocales consolidadas pueden ofrecer experiencia relevante y estabilidad para la

coordinación, así como el financiamiento y la capacidad necesarios para negociar e implementar el acuerdo (por ejemplo, Redwood CORE Hub en el condado de Humboldt, California).

- **Aumentar el poder de negociación mediante la comunicación a lo largo de la cadena de suministro.** Los casos analizados en este informe a lo largo de la cadena de suministro global muestran que lo que puede ser una disposición estándar en los acuerdos de una etapa —por ejemplo, pagos directos a comunidades cercanas a proyectos de extracción o generación— puede no ser común en etapas más intensivas en mano de obra, como la manufactura, donde se pone más énfasis en empleos y contratación. Sin embargo, estas diferentes disposiciones no se excluyen entre sí, y puede ser necesario que los defensores que están acostumbrados a organizarse con comunidades y trabajadores del sector manufacturero amplíen su caja de herramientas cuando se organicen con tribus y comunidades colindantes cerca de industrias extractivas, y viceversa. Al construir solidaridad a lo largo de la cadena de suministro, las comunidades pueden cerrar estas brechas en las normas aceptadas de estándares de CBAs y personalizar acuerdos que incluyan las combinaciones adecuadas de disposiciones financieras, laborales y de otro tipo que mejor apoyen sus prioridades en relación con un proyecto propuesto. Esta es actualmente una estrategia incipiente, pero hemos observado un aumento de conversaciones entre comunidades afectadas a lo largo de la cadena de suministro, que incluso pueden estar impactadas por las operaciones de la misma empresa (incluyendo a través de fronteras nacionales). Enfoques coordinados por parte de coaliciones como la Western Mining Action Network (WMAN) y UAW pueden aumentar el poder de negociación al ejercer presión desde múltiples frentes para construir solidaridad a lo largo de la cadena de suministro, desde la etapa inicial hasta la etapa final. Este enfoque también puede ampliar el conocimiento comunitario tanto sobre la gama de impactos como sobre las tácticas de organización local que han sido efectivas en sectores y proyectos relacionados.

Advertencias y alternativas: más allá de los CBAs

Reconsiderar el FPIC, el derecho a saber y el derecho a decir que no

Este informe no pretende promover los CBAs cuando no sea apropiado que las comunidades participen en negociaciones sobre proyectos inaceptables o cuyos impactos no puedan mitigarse. Los CBAs no sustituyen los principios de derechos humanos consagrados en el derecho internacional, como el consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés).

Los avances en la codificación de los derechos indígenas —como ILO 169 o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que estableció el FPIC— no surgieron de la nada ni de la buena voluntad de los Estados o de los organismos multilaterales. Más bien, el origen de estos derechos se encuentra en una trayectoria más larga de autoorganización indígena y empoderamiento político, enraizada en luchas materiales por el control de la tierra, el territorio y los recursos. En América Latina, donde estas luchas han sido particularmente intensas, hemos visto el surgimiento de organizaciones indígenas de alcance nacional, partidos políticos indígenas y presidencias indígenas, constituciones nacionales que incorporan y amplían las normas jurídicas internacionales, y casos judiciales litigados y ganados para defender derechos, incluso a nivel regional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, no sorprende que dos tercios de las personas firmantes de ILO 169 sean Estados latinoamericanos.

Derechos como el FPIC son, por lo tanto, el resultado de períodos prolongados de organización y construcción de poder. Pero estos avances jurídicos no ponen fin a la lucha por el reconocimiento ni por la redistribución.⁵⁹ En muchos casos, siguen siendo derechos “de papel”: existen en los textos, pero se aplican rara vez o solo de

⁵⁹ Coulthard, *Red Skin, White Masks*.

manera superficial en la práctica.⁶⁰ El FPIC suele presentarse de forma equivocada como una presentación de PowerPoint que minimiza los posibles daños ambientales y sociales o los oculta bajo un lenguaje excesivamente técnico —o, peor aún, que ni siquiera se presenta en la lengua materna del pueblo o Nación indígena en cuestión—. Las corporaciones cumplen con los pasos procedimentales porque es un requisito para obtener un permiso, una concesión o un contrato. Pero casi no se contempla una deliberación real por parte de las personas de la comunidad —y mucho menos la posibilidad de que una comunidad decida rechazar un proyecto—, lo que convierte el proceso de consulta previa en otra forma de “violencia extractiva”.⁶¹

De hecho, desde Guatemala hasta Ecuador y más allá, el déficit en la implementación sustantiva ha dado lugar a una práctica de movimiento conocida como “consultas comunitarias” o “auto-consultas”, en la que grupos comunitarios organizados presentan a los residentes un referéndum: “¿Estás a favor o en contra de que se construya esta mina?”⁶² Como estos procesos forman parte integral de la resistencia antiminería, dichas consultas suelen registrar una oposición abrumadora. Al mismo tiempo, las organizaciones de primera línea también siguen exigiendo que los Estados y las corporaciones respeten las formas oficiales de consulta y consentimiento, emprendiendo acciones legales y directas para defender sus derechos.

Además, algunas comunidades exigen más que el consentimiento —que puede suponer como objetivo llegar a un acuerdo sobre el proyecto en cuestión— y reclaman el reconocimiento del derecho a decir que no. En otras palabras, la política que rodea las normas jurídicas como el FPIC pone de relieve que las comunidades despliegan tácticas múltiples en su lucha por resistir la minería y/o

⁶⁰ Alexander Dunlap, “A Bureaucratic Trap: Free, Prior and Informed Consent (FPIC) and Wind Energy Development in Juchitán, Mexico,” *Capitalism Nature Socialism*, 2017.

⁶¹ Audra Simpson, “The Ruse of Consent and the Anatomy of ‘Refusal’: Cases from Indigenous North America and Australia,” *Postcolonial Studies*, 2017; Philippe Le Billon and Nicholas Middelorp, “Empowerment or Imposition?: Extractive Violence, Indigenous Peoples, and the Paradox of Prior Consultation,” in *Our Extractive Age: Expressions of Violence and Resistance*, ed. Judith Shapiro and John-Andrew McNeish (Routledge, 2021), https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/48472/9781000391589.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR1bwgX4S0kXK008WYabg6ISX15hxZjfKQHak_cgSvXZm2ZUgiyNkr93teY#page=86; Melisa Escosteguy et al., “We Are Not Allowed to Speak: Some Thoughts about a Consultation Process around Lithium Mining in Northern Argentina,” *The Extractive Industries and Society* 11 (September 2022): 101134, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101134>.

⁶² Laplante and Nolin, “Consultas and Socially Responsible Investing in Guatemala: A Case Study Examining Maya Perspectives on the Indigenous Right to Free, Prior, and Informed Consent.”

transformar las condiciones de la extracción. Esto revela la estrecha relación entre los espacios formales de participación y las formas más contenciosas de acción directa.

¿Qué significa todo esto para los CBAs? Depende del caso y del contexto. En algunos entornos, los CBAs son resultados directos de procesos de consulta y consentimiento. En otros, las negociaciones de CBAs iniciadas por la corporación pueden estar pensadas para eludir procesos más sustantivos: el tipo de procesos que las comunidades de primera línea han imaginado cuando exigen la aplicación del FPIC o cuando llevan a cabo sus propias deliberaciones internas. El FPIC desplegado como una demanda comunitaria dirigida a los gobiernos para que garanticen que las corporaciones cumplan la ley y respeten a los pueblos indígenas como guardianes de la tierra es algo muy distinto del FPIC como casilla que una corporación marca para obtener un permiso necesario de parte del funcionariado gubernamental. Sin embargo, nuevamente, ninguno de estos patrones es por sí mismo determinante: una corporación puede ser quien da el primer paso, pero las comunidades pueden organizarse para descarrilar y forzar una renegociación del CBA propuesto. O, por el contrario, lo que comienza como una demanda comunitaria puede ser cooptado por actores más poderosos, lo que lleva a la desmovilización y al silencio. Como hemos argumentado a lo largo de este informe, los hechos sobre el terreno son, en lo fundamental, producto de relaciones de poder dinámicas y de secuencias complejas de acontecimientos, que dan lugar a una amplia gama de “acuerdos políticos” a lo largo de las fronteras globales de la extracción de recursos.⁶³

Críticas al greenwashing

Una de las críticas a los CBAs es un comentario sobre las iniciativas de responsabilidad social corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) en general: que estas iniciativas funcionan solamente como una forma de greenwashing. El greenwashing consiste en un conjunto de esfuerzos de mercadotecnia o comunicación por parte de una

⁶³ Anthony Bebbington et al., “Political Settlements and the Governance of Extractive Industry: A Comparative Analysis of the Longue Durée in Africa and Latin America,” ISID Working Paper No. 81, Effective States and Inclusive Development Research Centre, preprint, Social Science Research Network, June 3, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2986786>; Anthony Bebbington et al., “Socio-Environmental Conflict, Political Settlements, and Mining Governance: A Cross-Border Comparison, El Salvador and Honduras,” *Latin American Perspectives* 46, no. 2 (2019): 84–106, <https://doi.org/10.1177/0094582X18813567>.

empresa, los cuales intentan convencer al público de que la empresa es más responsable y amigable con el ambiente y/o con lo social de lo que realmente es.

Las empresas pueden ofrecer beneficios a las comunidades como una forma de greenwashing para mejorar su imagen pública.⁶⁴ Por otro lado, las comunidades pueden aceptar beneficios poco significativos si temen que no hay alternativa, o que la alternativa es simplemente no recibir ningún beneficio en absoluto.

Las comunidades pueden usar los CBAs como una herramienta poderosa para negociar directamente con las desarrolladoras, pero también se ha criticado a los CBAs por dejar un vacío de regulaciones estatales. Las comunidades pueden firmar un acuerdo jurídicamente vinculante con los dueños del proyecto para exigir rendición de cuentas, pero sigue siendo fundamental que existan protecciones gubernamentales formales para garantizar que los impactos ambientales o sociales negativos se mitiguen de manera adecuada.⁶⁵ Mientras que las agencias estatales y gubernamentales tienen el poder de rechazar proyectos que no cumplen con los requisitos sociales y ambientales mínimos, las comunidades pueden quedar sin una vía real para decir “no”, con poco poder para negociar términos sólidos en un acuerdo. Por ello, es crucial que las personas de la comunidad participen en el proceso formal de planificación, ya sea que existan o no negociaciones de CBAs.

La copropiedad es un modelo que puede ayudar a reforzar la equidad entre comunidades y empresas. Sin embargo, la investigación muestra que las empresas conjuntas y los esquemas de participación accionaria varían ampliamente y deben diseñarse con mucho cuidado para mitigar el riesgo y la responsabilidad si realmente buscan incrementar la participación significativa y el bienestar.⁶⁶

⁶⁴ Thea Riofrancos, “What Green Costs,” *Logic Magazine*, December 7, 2019, <https://logicmag.io/nature/what-green-costs/>; Daniel Macmillen Voskoboynik and Diego Andreucci, “Greening Extractivism: Environmental Discourses and Resource Governance in the ‘Lithium Triangle,’” *Environment and Planning E: Nature and Space* 5, no. 2 (2021): 787–809, <https://doi.org/10.1177/25148486211006345>; Jerez et al., “Lithium Extractivism and Water Injustices in the Salar de Atacama, Chile: The Colonial Shadow of Green Electromobility”; Mighty Earth, *GM Wants “Everybody In” on Greenwashing* (2023), <https://peopleofredmountain.com/2023/06/17/general-motors-caught-greenwashing/>; Alexander Dunlap et al., “The Political Ecologies of ‘Green’ Extractivism(s): An Introduction,” *Journal of Political Ecology* 31, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.2458/jpe.6131>; Matthew Archer and Filipe Calvão, “Sustaining Decarbonisation: Energy Storage, Green Extractivism, and the Future of Mining,” *Antipode* 0, no. 0 (2024): 1–21, <https://doi.org/10.1111/anti.13066>; Britton et al., “Hydrosocial Imaginaries of Green Extractivism.”

⁶⁵ Peterson St-Laurent and Le Billon, “Staking Claims and Shaking Hands,” 2015.

⁶⁶ Anthony Kung et al., “Indigenous Co-Ownership of Mining Projects: A Preliminary Framework for the Critical Examination of Equity Participation,” *Journal of Energy & Natural Resources Law* 40, no. 4 (2022): 413–35, <https://doi.org/10.1080/02646811.2022.2029184>.

“Trabajar de buena manera” más allá de monetizar los beneficios

Se están desarrollando enfoques para ir más allá de los marcos coloniales, de maneras que se centran en construir relaciones, practicar una evaluación relacional y crear estructuras institucionales que perduren.⁶⁷ Estos enfoques centrados en los pueblos indígenas suelen conocerse como “Cómo hacer lo correcto” o “Trabajar de buenas maneras”.⁶⁸ Los principios de participación comunitaria, enmarcados como principios que deben seguir quienes buscan relacionarse con las comunidades, incluyen:

- **Alfabetización y preparación:** prepararse antes de la participación comunitaria desarrollando conocimientos básicos sobre las historias, culturas y experiencias de la comunidad;
- **Reflexión:** involucrarse en una práctica reflexiva para desarrollar una autoconciencia crítica;
- **Construcción de relaciones:** desarrollar relaciones que antecedan, sostengan y sobrevivan a los programas y a las alianzas formales;
- **Reciprocidad:** asegurarse de que las comunidades experimenten beneficios mutuos y reconocer —económicamente y de otras maneras— el trabajo que las personas de la comunidad aportan a la construcción de relaciones;
- **Protocolos:** seguir las prácticas específicas de cada Nación y comunidad que demuestren respeto por las formas indígenas de conocer, ser y hacer;
- **Humildad:** reconocer la experiencia que existe dentro de las comunidades y retribuir de maneras significativas;

⁶⁷ Nicki Ferland et al., *WORKING IN GOOD WAYS: A Framework and Resources for Indigenous Community Engagement* (Community Engaged Learning Program, University of Manitoba, 2021), <https://www.readkong.com/page/working-in-good-ways-a-framework-and-resources-for-2649111>; Finn, et al. “Tribal Benefit Agreements.”

⁶⁸ The Sogorea Te’ Land Trust, *How to Come Correct: Protocols, Guidelines and Invitations by the Sogorea Te’ Land Trust*, 2023, https://sogoreate-landtrust.org/slt_resources/how-to-come-correct-2/.

- **Colaboración:** trabajar en alianzas donde las comunidades tengan un poder comparable o mayor en la toma de decisiones.⁶⁹

La velocidad del desarrollo puede verse influida por este enfoque de participación comunitaria. Los cronogramas de desarrollo pueden ralentizarse dentro de este marco o incluso retroceder. Sin embargo, la observación común de que hay que “ir despacio para ir rápido” sugiere que los esfuerzos por “avanzar a la velocidad de la confianza” y centrarse en practicar una evaluación relacional pueden tener más éxito a largo plazo.⁷⁰ Esto puede ayudar a evitar demandas prolongadas u otros retrocesos causados por un apoyo comunitario insuficiente.

Recomendaciones en materia de políticas

Con una atención cuidadosa a las advertencias y alternativas anteriores, las políticas de CBAs pueden tener la capacidad de convertirse en una parte importante de una transición más justa en Estados Unidos. Los CBAs jurídicamente vinculantes y exigibles que tratan a las comunidades como socias recíprocas tienden a generar un apoyo local más duradero a las políticas que invierten en la economía verde. Esto puede derivar en un círculo virtuoso en el que las comunidades impulsen una mayor inversión gubernamental en la transición energética. Si el gobierno y las empresas dan a las comunidades más control, esto puede llevar a resultados mejores y más duraderos para todas las partes. Todo esto apunta a la necesidad de elevar las expectativas mínimas para los CBAs.

⁶⁹ Ferland et al., *WORKING IN GOOD WAYS: A Framework and Resources for Indigenous Community Engagement*; The Sogorea Te' Land Trust, *How to Come Correct: Protocols, Guidelines and Invitations by the Sogorea Te' Land Trust*.

⁷⁰ adrienne maree brown, *Emergent Strategy: Shaping Change, Changing Worlds* (AK Press, 2017).

1. Exigir CBAs: los gobiernos pueden establecer los CBAs como condición para otorgar permisos o financiamiento

- Los gobiernos federales, estatales y locales deben exigir que los proyectos que reciben préstamos o aprobación gubernamental negocien CBAs jurídicamente vinculantes y exigibles que vayan más allá de políticas, planes o lineamientos debilitados. Los CBAs deben formar parte del acuerdo firmado para financiamiento o permisos, e idealmente deben abordar las preocupaciones pertinentes para las comunidades directamente afectadas en cada una de las categorías de disposiciones mencionadas anteriormente, incluidas gobernanza, finanzas, trabajo, medio ambiente y aplicación y cumplimiento.
- El Congreso y las legislaturas estatales pueden exigir que los proyectos en tierras federales o estatales paguen un porcentaje de las utilidades a las comunidades locales (esto también podría hacerse por medio de las legislaturas estatales para las tierras estatales). En algunos de los casos que hemos analizado, los pagos se distribuyen a condados o municipalidades locales a través de impuestos, regalías o pagos globales. En otros, los pagos fijos o combinados se distribuyen directamente a tribus y/o a organizaciones comunitarias. Lo primero puede ser aceptable en zonas donde existe una fuerte confianza en los funcionarios electos, pero lo segundo puede ser preferible en lugares donde las instituciones democráticas son relativamente débiles. Estos pagos suelen representar una fracción mínima del rendimiento de la inversión, pero en el siguiente conjunto de recomendaciones proponemos posibles instrumentos financieros para nivelar el terreno de juego.
- En cuanto al momento, lo ideal sería que se exigiera la negociación de CBAs antes de la aprobación de los permisos para maximizar el poder de negociación de las comunidades, aunque también puede tratarse de un proceso iterativo. Deben existir criterios claros para garantizar la máxima representatividad comunitaria y evitar la cooptación de coaliciones o de grupos

particulares dentro de las coaliciones. Las organizaciones comunitarias que participan en el proceso deben tener la capacidad de reabrir y/o renegociar el acuerdo con base en la información recopilada durante o después del proceso de revisión ambiental.

- Nuestro análisis anterior de los marcos de políticas en California, Nueva York y Detroit ofrece lecciones sobre cómo las jurisdicciones a nivel estatal y municipal pueden integrar el requisito de un CBA en su proceso de permisos. Se necesitan requisitos claros para diseñar e implementar mecanismos de cumplimiento y transparencia de manera democrática, mediante una participación comunitaria sólida y la selección de un consejo asesor comunitario que represente verdaderamente a las comunidades directamente afectadas. Se debe proporcionar capacitación y recursos adecuados a los integrantes de los consejos asesores comunitarios para que puedan negociar y monitorear los proyectos, especialmente cuando el desarrollo subsidiado se agiliza.

2. Establecer estándares claros y consistentes para los CBAs: las comunidades pueden definir qué disposiciones deben incluirse en un CBA sólido

- Las comunidades deben evitar el doble conteo. Los acuerdos pueden reconocer o incorporar regulaciones existentes y señalar que estas son los estándares mínimos que ya se requieren según la ley federal, estatal o local. Sin embargo, un CBA idealmente debe ir más allá de las medidas de mitigación requeridas. En su lugar, los acuerdos pueden enfocarse en nuevas disposiciones que complementen y refuercen las normas y regulaciones, para brindar beneficios más duraderos a la comunidad.
- Los siguientes estándares están lejos de ser exhaustivos, y recomendamos que las comunidades consulten a personas expertas en derecho con experiencia en la negociación de CBAs, pero puede valer la pena considerar la siguiente lista de demandas para empezar a construir una base sólida para un CBA:

- **Redistribuir una parte justa de las utilidades de vuelta a la comunidad.**
 - Un piso sólido podría ser una distribución anual de beneficios de al menos 5% de los ingresos netos, además de impuestos o regalías, tomando como referencia normas internacionales (p. ej., 3.5% para Albemarle en Atacama, Chile, o 4.5% para el Acuerdo de Raglan en Canadá).
 - Un piso incentivado por niveles puede fomentar la inversión, con pagos que aumentan con el tiempo (p. ej., 2.5% —un porcentaje menor al inicio— y 8-15% —un porcentaje mayor— después de recuperar la inversión y cubrir la auditoría).⁷¹
 - Las tasas volumétricas o basadas en la producción (p. ej., toneladas de cobre o kWh de energía) pueden ayudar a tomar en cuenta las fluctuaciones del mercado.
 - La diversificación de ingresos puede lograrse combinando pagos fijos y regalías u otras fuentes financieras.⁷²
 - La colaboración entre comunidades puede maximizar el poder de negociación y garantizar una distribución justa de beneficios con divisiones mínimas.
- **Hacer que las tribus y/o comunidades sean copropietarias parciales o totales de los proyectos.**
 - La copropiedad y el reparto de participación accionaria pueden comenzar en 10-50% con base en normas internacionales para empresas conjuntas.⁷³ Incluso si se trata de una participación minoritaria, las comunidades deben contar con autoridad en la toma de decisiones, con un poder de voto sólido y mecanismos de resolución de disputas.

⁷¹ Gunton et al., *Impact Benefit Agreement Guidebook*.

⁷² Gunton et al., "Designing Fiscal Regimes for Impact Benefit Agreements."

⁷³ Indigenous Peoples Rights International and Business & Human Rights Resource Centre, *Exploring Shared Prosperity: Indigenous Leadership and Partnerships for a Just Transition*.

- Los criterios de solicitud de propuestas (RFP) deben garantizar una participación justa y equitativa de las empresas indígenas y negocios locales.
- Los arreglos de copropiedad y participación accionaria, incluidos los términos de cualquier fideicomiso o préstamo para financiar la participación de la tribu o de la comunidad, deben definirse antes de que comience la construcción, con acceso a capital y financiamiento, y los beneficios deben diseñarse para que sean duraderos y sobrevivan a los ciclos de auge y caída de las materias primas.
- La participación accionaria y las empresas conjuntas en el sector minero pueden ser especialmente riesgosas. Las comunidades pueden quedar expuestas a responsabilidades legales y financieras si un proyecto fracasa o provoca daño ambiental. Los costos iniciales pueden minimizarse con capital gratuito, préstamos sin recurso o garantías de préstamos sin intereses.⁷⁴
- La participación accionaria y las oportunidades comerciales deben tratarse por separado de los CBAs, que son acuerdos jurídicamente vinculantes, a menudo basados en derechos.
- **Otorgar subvenciones para infraestructura local.**
 - Los fondos de beneficios comunitarios pueden ayudar a financiar escuelas, vivienda asequible, parques, becas, negocios locales, estudios de terceros, monitoreo ambiental y mucho más.
- Ofrecer empleos de alto estándar que permitan sostener a una familia, con disposiciones equitativas de contratación y promoción, y organizar iniciativas de capacitación para personas de la comunidad local.

⁷⁴ First Nations Major Projects Coalition, *Ownership Model Handbook: First Nations Project Ownership and Access to Capital for Investment in Major Infrastructure Projects*; Finn, et al. "Tribal Benefit Agreements," 42.

- Los CBAs sólidos deben ir más allá de los PLAs de construcción y abarcar las operaciones y el mantenimiento a largo plazo, para promover un desarrollo económico duradero.
- Se deben abordar las preocupaciones de salud y seguridad.
- El desarrollo de la fuerza laboral debe incluir capacitación en el trabajo, así como programas de aprendizaje y preaprendizaje organizados por la empresa.
- **Agregar protecciones que vayan más allá de las regulaciones y medidas de mitigación requeridas, como la restauración, que apunten a un beneficio ambiental neto.**
 - El monitoreo obligatorio del agua, el aire, los recursos culturales tribales y la salud ambiental debe cubrir toda la vida del proyecto y extenderse más allá si se prevé que los impactos persistan.
 - Se debe fortalecer la capacidad de las comunidades para participar en las decisiones sobre el uso de suelo y analizar los impactos del proyecto.
 - Se deben llevar a cabo evaluaciones del ciclo de vida de principio a fin a lo largo de la cadena de suministro. Esto ofrecería una visión más amplia de los impactos ambientales que los procesos de revisión ambiental requeridos y, dependiendo de la evaluación, también podría ayudar a las empresas a demostrar una reducción de riesgos ESG.
 - Se deben incluir planes claros para el cierre, el desmantelamiento y la constitución de garantías financieras, con sanciones para mitigar la contaminación y cubrir la remediación.
- **Asegurar que los acuerdos sean jurídicamente exigibles y tengan fuerza real mediante mecanismos sólidos de monitoreo.**

- Los acuerdos deben incluir un proceso de resolución de disputas y/o cláusulas de arbitraje.
- Métricas definidas, un comité de monitoreo y reportes periódicos pueden responsabilizar a las partes y garantizar que se cumplan las metas.
- El incumplimiento del CBA debe sancionarse claramente, con identificación de las partes responsables de la aplicación.
- Los beneficios comunitarios deben perdurar en caso de adquisición, bancarrota, ejecución hipotecaria, etc.
- **Incorporar la opinión comunitaria en la planificación y el desarrollo del proyecto mediante una buena gobernanza.**
 - La consulta con los pueblos indígenas debe adherirse al FPIC, a través de relaciones de gobierno a gobierno, incluyendo el monitoreo y la protección de los recursos culturales tribales.
 - Las comunidades deben poder participar en el proceso de toma de decisiones para definir expectativas.
 - La información debe compartirse de manera inclusiva y transparente en reuniones periódicas y materiales de divulgación comunitaria accesibles a lo largo de todo el proceso, desde la organización hasta la implementación. Las negociaciones transparentes de CBAs proporcionan una base ética para beneficios con impactos más amplios cuando las comunidades directamente afectadas están al centro del proceso.

3. Preparar el terreno para la negociación de CBAs: el sector público puede crear las condiciones para dar a las comunidades más poder para negociar acuerdos justos

- Revisar las leyes y prácticas mineras federales y estatales existentes para otorgar a las comunidades y a las tribus el derecho de tanteo sobre las concesiones mineras dentro de un radio claro definido mediante un consentimiento y consulta adecuados, y a través de relaciones de gobierno a gobierno.
- Exigir acceso a la información clave que las comunidades necesitan para negociar un CBA justo. Por ejemplo, alinear el calendario de las evaluaciones de impacto ambiental y de la obtención de permisos con un proceso de CBA si las personas interesadas de la comunidad presentan esa solicitud ante el organismo regulador.
- Alentar a las agencias de permisos a reconocer los compromisos asumidos en un CBA dentro del expediente del procedimiento, bajo la premisa de que, en ausencia del CBA, se habrían presentado objeciones durante el proceso de permisos. El objetivo a largo plazo sería que la comunidad tenga legitimación para plantear determinados temas de mitigación si la desarrolladora no implementa el CBA.
- Publicar una biblioteca gratuita y de acceso abierto de los CBAs vigentes para ayudar a fomentar el desarrollo de protocolos generales y métricas para la supervisión y el cumplimiento. Si ciertos acuerdos son confidenciales, las organizaciones con acceso podrían considerar formas de anonimizarlos para desidentificar a las partes y, aun así, divulgar los detalles pertinentes.
- Otorgar subvenciones a comunidades y tribus para contratar a personas expertas legales y temáticas que realicen investigación y labores de incidencia en apoyo a las negociaciones.

4. Brindar apoyo directo a las comunidades para negociar CBAs: los organizadores pueden abogar por más recursos para apoyar a las comunidades que requieren asistencia adicional

- Invertir en educación comunitaria y en el desarrollo de liderazgo y de capacidad organizativa para negociar e implementar un CBA.

Un fondo de reserva sistemático derivado de un porcentaje de todos los proyectos puede utilizarse para educación comunitaria, divulgación y participación durante el proceso de planificación, así como para capacitación de personas negociadoras, ya sean organizadoras sindicales, coaliciones comunitarias o equipos legales. Estos fondos también pueden destinarse a disposiciones específicas de CBAs, como contratación y promoción equitativa de primera fuente, medidas de rendición de cuentas y desarrollo de la fuerza laboral.

- Hacer un llamado al Colegio de Abogados del Estado para que cree o amplíe programas pro bono que ofrezcan a los abogados la oportunidad de aportar sus habilidades legales a cambio de cuotas anuales reducidas o exentas ante el Colegio de Abogados del Estado y/o acceso gratuito o a tarifas reducidas para asistir a programas de Educación Jurídica Continua Mínima (MCLE, por sus siglas en inglés).
- Alentar al Colegio de Abogados del Estado a ampliar sus directorios en línea de despachos jurídicos que realizan trabajo pro bono, para identificar específicamente a aquellos que apoyan a tribus, organizaciones de justicia ambiental, sindicatos y otros grupos comunitarios en la negociación de CBAs.
- Desarrollar un curso acreditado de educación continua para abogados de asistencia legal sobre cómo ayudar a sus clientes a negociar y redactar CBAs.
- Informar a fundaciones filantrópicas y a gobiernos locales o estatales sobre la posibilidad de financiar el desarrollo de capacidades que respalde la naturaleza plurianual de la negociación de CBAs y el ciclo de vida extendido de un proyecto.

Conclusión

Este informe ha explorado los límites y las posibilidades de los CBAs para construir poder comunitario a lo largo de la cadena de suministro en la transición energética. A través de una amplia variedad de estudios de caso dentro y fuera de Estados Unidos, analizamos cómo los pueblos indígenas y las comunidades de justicia ambiental pueden minimizar las cargas y maximizar los beneficios en acuerdos relacionados con las industrias extractivas y la energía renovable.

Nuestro análisis abordó distintos nodos de la red global de producción de energía: desde la extracción inicial hasta el procesamiento, la manufactura y el transporte finales, así como la generación, el almacenamiento y la transmisión de energía eléctrica. Mediante un análisis crítico de las normas jurídicas internacionales y de los marcos de políticas a nivel federal, estatal y municipal, examinamos las condiciones, disposiciones y estrategias mediante las cuales los CBAs pueden hacer que la transición lejos de los combustibles fósiles sea más justa para todas las personas. A medida que se acelera el desarrollo minero y energético para mitigar el cambio climático, el diseño y la negociación de CBAs también pueden apresurarse, por lo que es fundamental que las comunidades se organicen y actúen para aportar comentarios significativos de manera temprana y frecuente.⁷⁵

Los CBAs sólidos son el resultado de comunidades organizadas que toman acción colectiva para construir poder, en dos sentidos de la palabra. Primero, crean las condiciones para el empoderamiento social y económico a nivel local. Segundo, al garantizar que las comunidades se beneficien de la transición energética, establecen las condiciones para el despliegue rápido de energía de cero emisiones, lo que a su vez redistribuye energía más limpia de regreso a las comunidades.

En contraste, sin el apoyo comunitario, es probable que aumente la resistencia a los proyectos de transición energética. Las tribus y comunidades que se sienten ignoradas, explotadas, maltratadas y

⁷⁵ MiningWatch Canada, *Turning Down the Heat: Can We Mine Our Way Out of the Climate Crisis?* (2020), https://miningwatch.ca/sites/default/files/miningwatch_review_page.pdf.

manipuladas tienen buenas razones para defender su tierra, proteger su entorno y expresar preocupaciones sobre las políticas que conducen a una transición energética integral, o al menos para no presentarse a apoyarlas. Si bien algunos proyectos tienen, sin duda, impactos sociales o ambientales inaceptables o imposibles de mitigar que justifican una oposición local firme, otros proyectos pueden presentarse como “verdes” y aun así no ofrecer una participación comunitaria oportuna y adecuada. Esto socava las condiciones políticas para una transición hacia energías renovables que sea ambientalmente justa y económicamente beneficiosa.

Nuestras recomendaciones en materia de políticas están diseñadas para que gobiernos, organizadores y defensores construyan sobre una base más sólida que ayude a nivelar el terreno para las tribus y las comunidades mientras se preparan para negociar CBAs con los desarrolladores de proyectos. Para poner en práctica las recomendaciones de este informe, invitamos a las personas de la comunidad a explorar y utilizar nuestro conjunto o kit de herramientas complementario sobre CBAs, que ofrece más orientación y hojas de trabajo interactivas, plantillas, documentos de ejemplo y otros recursos para entablar negociaciones efectivas orientadas a lograr un CBA sólido y exigible.